

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
VICERRECTORIA EN INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TESIS
EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL EN EL PROCESO PENAL
ACUSATORIO PANAMEÑO

POR
ABRAHAM DÍAZ ALVARADO
8-425-207

DIRECTOR

PROFESORA ELIZABETH ANDRADES

PANAMA
2019

DEDICATORIA

Este trabajo de investigación lo dedicamos a Dios por darnos la oportunidad de vivir y acompañarnos en cada paso que damos por fortalecer el corazón e iluminar la mente Por la presencia de aquellas personas que han sido soporte y compañía durante todo el periodo de estudio Nuestros padres El señor Abraham Díaz y la señora Cándida Alvarado de Díaz gracias por darnos la vida por su amor y paciencia y por su apoyo incondicional. Gracias amigos y amigas por compartir los buenos y malos momentos

AGRADECIMIENTO

Infinitas gracias a Dios Todo poderoso por darnos la oportunidad de vivir hasta el día de hoy así como a nuestros padres hermanos sobrinos y a toda la familia por comprendernos y acompañarnos siempre a la directora de tesis profesora Elizabeth Andrade por sus oportunos consejos y la ayuda brindada para llevar adelante este proyecto. Es oportuno agradecer al Licenciado Justo Vargas que me ayudo con vital información para poder realizar este trabajo de graduación. Por ultimo queremos agradecer a todas y a cada una de las personas que participaron en la investigación realizada ya que invirtieron su tiempo y conocimiento para ayudar a cumplir este proyecto de tesis.

INDICE

	Pagina
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
RESUMEN	XVII
SUMMARY	XVIII
INDICE GENERAL	IV
INTRODUCCION	XIX
Capitulo Primero El Problema	1
1 1 El Problema	2
1 2 Planteamiento del Problema	3
1 3 Justificación del Proyecto	3
1 4 Objetivos Generales y Específicos	4
1 4 1 Objetivos Generales	4
1 4 2 Objetivos Específicos	4
1 5 Hipótesis del Trabajo	5
1 6 Metodología	5
1 7 Delimitación	5

Capítulo Segundo Funcional	6
2 1 Definición	7
2 2 Finalidad	12
2 3 Base Jurídica	14
2 4 Base argumentativa para solicitar la medida de secuestro civil en sede penal	19
2 5 Sujetos	20
2 5 1 Sujetos activos	21
2 5 1 1 La víctima	21
2 5 1 2 Querellante debidamente constituido	27
2 5 2 Sujetos pasivos	28
2 5 2 1 Persona imputada	28
2 5 2 2 Tercero civilmente responsable	29
2 6 Sobre que recaen	34
2 7 Bienes	35
2 8 Procedimiento	36
2 8 1 Solicitud de secuestro	36
2 8 2 Admisión del secuestro	37
2 9 Casos en que no se admite una solicitud de secuestro	41
2 10 Fijación de la caución	42
2 10 1 Caucciones	44
2 11 Secuestro civil en sede penal sin caución	46

2 12	Auto que fija la caución	49
2 12 1	Variación del monto de la caución	49
2 13	Solicitud de secuestro en audiencia	51
2 14	Admisión de la caución	51
2 15	Efectos del secuestro	53
2 16	Inventario y avalúo de bienes muebles	54
2 17	Avalúo	55
2 18	Ejecución del secuestro	56
2 19	Bienes muebles	60
2 20	Bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles	61
2 21	Derechos reales inscritos en Registro Público que afectan bienes muebles	62
2 22	Bienes muebles o derechos reales sobre bienes muebles inscritos en alguna oficina pública, distinta al registro público	63
2 23	Dineros, valores, créditos, derechos u otros bienes muebles pertenecientes al demandado, pero que están en posesión de un tercero	65
2 24	Sueldos o salarios	67
2 25	Facultades del juez de garantía en la ejecución del secuestro	69
2 26	Presentación de caución por parte del indiciado, imputado o tercero civilmente responsable	71
2 27	Suspensión del secuestro	72

2 28	Levantamiento del secuestro	73
2 29	Depositorio judicial	73
2 30	Supervisión del depositario judicial	74
2 31	Acta de la diligencia de depósito judicial	77
2 32	Oposiciones e impugnaciones incidentales	79
2 33	Solicitud de exclusión de bienes	81
2 34	Solicitud de rescisión del secuestro	83
2 35	Solicitud de levantamiento del secuestro	85
2 36	¿En qué otros supuestos se puede decretar el levantamiento de un secuestro civil en un proceso penal?	86
2 37	Solicitud de separación del depositario	87
2 38	Las incidencias acontecidas con motivo de la ejecución del secuestro	88
2 39	Devolución de la caución	88
2 40	La persona que le practicaron un secuestro civil en sede penal, es declarado inocente puede solicitar la fianza como pago de daños y perjuicios	89
	Capítulo Tercero Marco Metodológico	91
3 1	Descripción del estudio	92
3 2	Tipo de estudio	92
3 3	Sistema de variables	93

3 3 1	Variable independiente	94
3 3 1 1	Definición conceptual	94
3 3 1 2	Definición operacional	94
3 3 1 3	Definición instrumental	94
3 3 1 4	Indicadores	94
3 3 2	Variable dependiente	95
3 3 2 1	Definición conceptual	95
3 3 2 2	Definición operacional	95
3 3 2 3	Definición instrumental	95
3 3 2 4	Indicadores de la figura del secuestro civil	
	en sede penal	95
3 4	Fuentes de información	96
3 4 1	Fuentes primarias	96
3 4 2	Fuentes secundarias	96
3 5	Población y muestra	97
3 5 1	Población	97
3 5 2	Muestra	97
3 5 2 1	Tipo de muestra	97
3 6	Métodos e instrumentos de recolección de muestras	98
3 7	Procedimiento de recolección de muestra	98
3 8	Consideraciones éticas	99

Capitulo cuarto análisis de resultado	100
4 1 Análisis de datos	101
Cuadro N°1 Distribución de personas encuestadas según la sede de trabajo.	102
Gráfica N°1 Distribución de personas encuestadas según la Sede de trabajo	103
Análisis de cuadro y gráfica N° 1 - Distribución de personas encuestadas según la sede de trabajo	104
4 2 Resultado de encuesta	105
Cuadro N°2 - 1- ¿SABE USTED SI EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PUEDEN PRESENTARSE SECUESTRO CIVIL DE BIENES, PARA ASEGURAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN DELITO?	106
Gráfica N° 2 - 1- ¿SABE USTED SI EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PUEDEN PRESENTARSE SECUESTRO CIVIL DE BIENES, PARA ASEGURAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN DELITO?	107
Análisis de cuadro y gráfica N° 2 - 1- ¿SABE USTED SI EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PUEDEN PRESENTARSE SECUESTRO CIVIL DE BIENES, PARA ASEGURAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN DELITO?	108

Cuadro N° 3 - 2-¿HA RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	109
Gráfica N° 3 - 2-¿HA RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	110
Análisis de cuadro y gráfica N° 3 - 2-¿HA RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	111
Cuadro N° 4 - 3- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE ORALMENTE?	112
Gráfica N° 4 - 3- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE ORALMENTE?	113
Análisis de cuadro y gráfica N° 4 - 3- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE ORALMENTE?	114
Cuadro N° 5 - 4- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE POR ESCRITO?	115
Gráfica N° 5 - 4- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE POR ESCRITO?	116
Análisis de cuadro y gráfica N° 5 - 4- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE POR ESCRITO?	117
Cuadro N° 6. - 5- ¿SE DEBE FIJAR CAUCIÓN O NO, PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL?	118

Gráfica N° 6.- 5- ¿SE DEBE FIJAR CAUCIÓN O NO, PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL?	119
Análisis de cuadro y gráfica N° 6. - 5- ¿SE DEBE FIJAR CAUCIÓN O NO, PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL?	120
Cuadro N° 7. - 6- ¿PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL, CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE FIJAR CAUCIÓN?	121
Gráfica N° 7. - 6- ¿PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL, CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE FIJAR CAUCIÓN?	122
Análisis de cuadro y gráfica N° 7. - 6- ¿PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL, CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE FIJAR CAUCIÓN?	123
Cuadro N° 8. - 7- ¿EL SECUESTRO PENAL ES LO MISMO QUE EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	124
Gráfica N° 8. - 7- ¿EL SECUESTRO PENAL ES LO MISMO QUE EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	125
Análisis de cuadro y gráfica N° 8. - 7- ¿EL SECUESTRO	

PENAL ES LO MISMO QUE EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	126
Cuadro N° 9. - 8- ¿SI SE NIEGA LA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL ES APELABLE?	127
Gráfica N° 9. - 8- ¿SI SE NIEGA LA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL ES APELABLE?	128
Análisis de cuadro y gráfica N° 9. - 8- ¿SI SE NIEGA LA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL ES APELABLE?	129
Cuadro N° 10. - 9- ¿EL JUEZ PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?	130
Gráfica N° 10. - 9- ¿EL JUEZ PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?	131
Análisis de cuadro y gráfica N° 10. - 9- ¿EL JUEZ PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?	132
Cuadro N° 11. - 10- ¿LA OFICINA JUDICIAL PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?	133
Gráfica N° 11. - 10- ¿LA OFICINA JUDICIAL PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?	134

Análisis de cuadro y gráfica N° 11. - 10- ¿LA OFICINA JUDICIAL PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?	135
Cuadro N° 12. - 11- ¿SE PUEDE SOLICITAR EL REMATE DE BIENES SECUESTRADOS?	136
Gráfica N° 12. - 11- ¿SE PUEDE SOLICITAR EL REMATE DE BIENES SECUESTRADOS?	137
Análisis de cuadro y gráfica N° 12. - 11- ¿SE PUEDE SOLICITAR EL REMATE DE BIENES SECUESTRADOS?	138
Cuadro N° 13. - 12- ¿EL JUEZ DE GARANTIAS REALIZA EL REMATE JUDICIAL?	139
Gráfica N° 13. - 12- ¿EL JUEZ DE GARANTIAS REALIZA EL REMATE JUDICIAL?	140
Análisis de cuadro y gráfica N° 13. - 12- ¿EL JUEZ DE GARANTIAS REALIZA EL REMATE JUDICIAL?	141
Cuadro N° 14. - 13- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN POR ESCRITO?	142
Gráfica N° 14. - 13- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN POR ESCRITO?	143
Análisis de cuadro y gráfica N° 14. - 13- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN POR ESCRITO?	144
Cuadro N° 15. - 14- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE	

RESUELVEN EN AUDIENCIA?	145
Gráfica N° 15. - 14- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE	
RESUELVEN EN AUDIENCIA?	146
Análisis de cuadro y gráfica N° 15. - 14- ¿SI SE DAN	
INCIDENCIAS, SE RESUELVEN EN AUDIENCIA?	147
Cuadro N° 16. - 15- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES	
DECRETAN ESTA FIGURA?	148
Gráfica N° 16. - 15- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES	
DECRETAN ESTA FIGURA?	149
Análisis de cuadro y gráfica N° 16. - 15- ¿SON	
APELABLES LA RESOLUCIONES DECRETAN ESTA FIGURA?	150
Cuadro N° 17. - 16- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES	
NIEGAN ESTA FIGURA?	151
Gráfica N° 17. - 16- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES	
NIEGAN ESTA FIGURA?	152
Análisis de cuadro y gráfica N° 17. - 16- ¿SON	
APELABLES LA RESOLUCIONES NIEGAN ESTA FIGURA?	153
Cuadro N° 18. - 17- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL,	
TERMINA EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	154
Gráfica N° 18. - 17- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL,	
TERMINA EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	155

Análisis de cuadro y gráfica N° 18. - 17- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, TERMINA EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?	156
Cuadro N° 19. - 18- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE DEVUELVE LA FIANZA?	157
Gráfica N° 19. - 18- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE DEVUELVE LA FIANZA?	158
Análisis de cuadro y gráfica N° 19. - 18- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE DEVUELVE LA FIANZA?	159
Cuadro N° 20. - 19-¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE ENTREGA LA FIANZA AL ESTADO?	160
Gráfica N° 20. - 19-¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE ENTREGA LA FIANZA AL ESTADO?	161
Análisis de cuadro y gráfica N° 20. - 19- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE ENTREGA LA FIANZA AL ESTADO?	162
Cuadro N° 21. - 20- ¿SI A LA PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE PUEDE SOLICITAR LA FIANZA COMO PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS?	163
Gráfica N° 21. - 20-¿SI A LA PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE PUEDE SOLICITAR LA FIANZA	

COMO PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS?	164
Análisis de cuadro y gráfica N° 21. - 20-¿SI A LA	
PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO	
CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE	
PUEDE SOLICITAR LA FIANZA COMO PAGO DE DAÑOS	
Y PERJUICIOS?	165
CONCLUSIONES	166
RECOMENDACIONES	167
BIBLIOGRAFÍA	168

RESUMEN

El secuestro civil en sede penal, es una figura plasmada en el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal la cual le ha dado vigencia los derechos de las víctimas, ya que dentro de estos se encuentra el obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito. En este trabajo de graduación intentamos resumir como se debe llevar a cabo describiendo las fases que del mismo y como se debe solicitar y de esta forma en un solo proceso las víctimas del delito puedan utilizar esta figura jurídica para poder reclamar sus derechos. En este estudio utilizaremos fuentes nacionales y extranjeras como lo son doctrina, y también recurriremos a la jurisprudencia y a encuestas a los Jueces de Garantías que son las personas llamadas a aplicar esta figura en su práctica diaria, midiendo el conocimiento y si es utilizada en la práctica.

SUMMARY

The criminal kidnapping in a criminal court, is a figure embodied in Article 268 of The Criminal Code Which has given affect to the rights of the victims, since within this is to obtain civil compensation for damages and losses derived of the crime. In this graduation work we try to summarize how it should be carried out describing the phases of the same and how it should be requested and in this way in a single process the victims of crime can use this legal figure to be able to claim their rights. In this study we will use national and foreign sources such as doctrines, we also resort to jurisprudence and surveys to guarantee judges who are the people called to apply this figure in their daily practice, measuring knowledge and if it is used in practice.

INTRODUCCION

Nuestra realidad nacional en cuanto a la tramitación de las causas civiles, implica no sólo el inicio de un procedimiento civil a través de la interposición de una demanda, sino el cumplimiento de los términos y plazos comunes en esa jurisdicción; que permite que un proceso pueda demorar algunos años, porque las normas de dicho procedimiento civil lo permiten.

Con el secuestro civil en sede penal, debo manifestar que el legislador ha querido darle vigencia a los derechos de las víctimas, dentro de los cuales se encuentra el obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito.

Por ello, para darle vigencia a los derechos de las víctimas de delitos, y permitir que sea en la esfera penal, en el nuevo modelo procesal penal acusatorio; se atiendan esas reparaciones pecuniarias, es un logro de la justicia a favor de quienes se vieron forzados a formar parte de un proceso, permitirles equilibrar la balanza y haciendo que se privilegie la economía procesal y la concentración de los actos.

Sin embargo, como hemos investigados no se utiliza con mucha

frecuencia estas peticiones.

Es por esto, que me atrevo a adelantar, que a mi entender, los penalistas aún no han entendido la figura; pese a que el propio artículo 268 del Código Procesal Penal define su alcance y señala su expresa remisión a las disposiciones del Libro Segundo del Código Judicial; y por otro lado los civilistas aún no han descubierto las bondades de que esta figura se tramite en sede penal, con la consecuente culminación de todos los aspectos que un conflicto penal pueda acarrear, inclusive la reparación de los daños causados a las víctimas del delito y esa es la razón del valor de este trabajo de graduación.

CAPÍTULO PRIMERO

EL PROBLEMA

1 1 EL PROBLEMA

En relación con la importancia que reviste el tema que motiva esta investigación y análisis jurídico doctrinal con la implementación del Sistema Penal Acusatorio, en todo el territorio nacional, a partir del dos (2) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), se han efectuado una serie de cambios y modificaciones no sólo en el tratamiento, investigación, procesamiento y juzgamiento de conductas o hechos ilícitos sancionados por el Código Penal; sino además, estos cambios también han incidido en la forma como es tratada la víctima de un delito.

Y ello así, porque se le ha puesto en el sitio que merecen las víctimas de estos hechos, de tal forma que los mismos tienen participación activa a lo largo del proceso penal de sistema penal acusatorio; uno de esos cambios, es precisamente el reconocimiento del derecho a ser resarcido por los daños y perjuicios que la comisión de un hecho delictivo le haya ocasionado.

Es allí donde esta figura de reconocimiento de daños civiles, en el proceso penal, que no es nueva ya que el Libro Tercero del Código Judicial, hoy derogado, también permitía que fuese reconocido por el Juez Penal; sin embargo, en el actual Código Procesal Penal, se le brinda una herramienta efectiva para garantizar los resultados de dicho daño, a través del reconocimiento en sede del proceso penal, de figuras como el secuestro civil efectuada por la víctima o tercero civilmente afectado, quienes con las particularidades del proceso penal acusatorio, que es oral y anti formalista, intenta darle respuesta a

un tema que con anterioridad era rezagado y dirigido a la espera de una sanción penal, a fin de iniciar un proceso civil en el que se podría entonces por medio de un secuestro buscar los resultados de aquel proceso, que al final de seguro resultaba ilusorio porque a quien se le sancionaba penalmente, ya había traspuesto los bienes o ingresos con los que podría afrontar la responsabilidad civil de los daños que con su acción ilícita penal le hubiese causado a la víctima del delito o al tercero que se viera afectado por ese hecho punible.

1 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Es significativo, investigar y analizar, los requisitos, los principios que regulan ese instituto civil en sede procesal penal, ya que es novedoso e importante, ya que no existe estudio en la actualidad que trate sobre la forma de peticionar un secuestro civil, con estas particularidades; de igual forma el aporte que se efectúa a través de este estudio servirá de base para otros.

1 3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Este estudio es necesario porque como ya se señaló no existen estudios actualizados de este tema y es necesario que los profesionales del derecho que se dediquen a la rama del derecho penal conozcan como como pueden aplicar esta figura procesal dentro del nuevo proceso penal acusatorio y también para que sirva para el público en general tengan el conocimiento de esta figura.

1 4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1 4 1 OBJETIVOS GENERALES

- Analizar la figura del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.
- Indicar los supuestos de aplicación de la figura en la República de Panamá.
- Delimitar aspectos fundamentales de la figura del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.

1 4 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aspectos fundamentales de la figura del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.
- Identificar los elementos principales del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.
- Analizar la aplicación del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.
- Fundamentos jurídicos del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.
- Analizar las ventajas de la aplicación del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá.

1 5 HIPÓTESIS DEL TRABAJO

El estudio de la figura del secuestro civil en sede penal en el proceso penal acusatorio de la República de Panamá ayudará a que sea más utilizada en la práctica.

1 6 METODOLOGÍA

En esta investigación, se utilizará diversos métodos, entre estos el deductivo, histórico, comparativo y dogmático.

1 7 DELIMITACIÓN

En esta Investigación solamente se tomara en cuenta la figura del secuestro civil en sede penal desde el punto de vista de los Jueces de Garantías que son quienes el Código Procesal Penal les facultad para decretarla.

CAPÍTULO SEGUNDO

MARCO FUNCIONAL

2.1 DEFINICIÓN

La figura del “Secuestro” o “Depósito Judicial” responde a directrices debidamente establecidas en el Título II del Libro II del Código Judicial, y en el caso específico del Sistema Penal Acusatorio, en el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal aunque ya estaba anteriormente regulado por el artículo 4 de la Ley 31 de 1998 de la Protección a las Víctimas del Delito.

No hay que confundir esta figura con la del Secuestro Penal que se encuentra regulada en el Título V Medidas Cautelares, Capítulo II Medidas Cautelares Reales, Sección 2a., Secuestro Penal en los artículos 259 a 267 del Código de Procedimiento Penal.

Por lo tanto es parte de los derechos de las víctimas de un delito y encuadra en el postulado a favor de la víctima en su derecho a la reparación del daño es una forma para cumplir esta reparación y son derechos de la víctima constituida en actor civil teniendo los siguientes derechos:

- A ser resarcida económicamente por los daños derivados del delito.
- A intervenir en el proceso en razón del interés civil.

Así el proceso penal cumple, entre otras, una función de aseguramiento tanto de la responsabilidad penal como de la responsabilidad civil derivada de la infracción penal, mediante la adopción de medidas cautelares personales y reales.

Las medidas cautelares reales son integradas por aquellas que tienen por objeto el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias de la persona o personas imputadas en un proceso penal.

En nuestro Código Penal se establece la Responsabilidad Civil Derivada del Delito, en el Título VI, de los artículos 119 al 130 que indican lo siguiente:

“ARTICULO 119. De todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo.

Artículo que define la responsabilidad Civil en Panamá.

ARTICULO 120. En la sentencia condenatoria dictada en juicio criminal se podrá ordenar:

1. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a su familia o a un tercero.
2. La restitución de la cosa obtenida por razón del delito o en su defecto el respectivo valor.

En este artículo se indica lo que se podrá ordenar en una sentencia condenatoria.

ARTICULO 121. En los casos de inimputabilidad subsiste la responsabilidad civil del incapaz siempre que queden asegurados sus alimentos o los gastos que ocasione su internamiento. De ella serán subsidiariamente responsables sus padres, tutores, curadores y guardadores siempre que hubieren podido evitar el daño, o descuidado sus deberes de guarda.

Artículo que indica quienes son subsidiariamente responsables de los daños ocasionados por un delito.

ARTICULO 122. En todos los hechos amparados por una causa de justificación, sus autores están exentos de responsabilidad civil, excepto en el caso de estado de necesidad previsto en el artículo 20 cuando se afectan bienes patrimoniales.

Los tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, las cuotas proporcionales de que cada beneficiario deba responder.

Artículo que indica las excepciones de la responsabilidad civil.

ARTICULO 123. Cuando el inferior jerárquico obrare en virtud de obediencia debida, responderá civilmente con sus bienes el superior que ordenó la ejecución del acto ilícito.

Artículo que indica la responsabilidad civil del superior jerárquico en casos de obediencia debida.

ARTICULO 124. Cuando la víctima haya contribuido con su conducta a la producción del daño, el Tribunal podrá reducir equitativamente el monto de la reparación civil.

Artículo que indica que cuando la víctima haya contribuido al daño se reducirá el monto de la reparación civil.

ARTICULO 125. Los partícipes de un hecho punible, son solidariamente responsables en cuanto a la reparación civil.

Están igualmente obligados solidariamente con los autores del hecho punible, al pago de los daños y perjuicios:

1. Las personas naturales o jurídicas dueñas de empresas de transporte terrestre, marítimo o aéreo de personas o de cosas por hechos cometidos por sus trabajadores de transporte, con ocasión del desempeño de sus cargos;

2. Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o representantes legales, resulten responsables de hechos punibles que impliquen violación de las atribuciones inherente (sic) al cargo que desempeñan en la empresa;

3. Las personas naturales o jurídicas dueñas de establecimiento de cualquier naturaleza, en que se cometiere un hecho punible por trabajadores a su servicio y con motivo del desempeño de sus cargos;

4. Los que a título lucrativo hayan participado de los efectos del hecho punible, en el monto en que se hayan beneficiado, y
5. Los que señalen leyes especiales.

En este artículo se señalan las reglas de la solidaridad de la reparación civil.

ARTICULO 126. El Estado, las instituciones públicas autónomas, semi-autónomas o descentralizadas así como los municipios, responderán subsidiariamente en el monto de los daños y perjuicios derivados de los hechos punibles cometidos por sus servidores con motivo del desempeño de sus cargos.

En este artículo se señala la responsabilidad civil de las instituciones públicas autónomas, semi-autónomas o descentralizadas y los municipios en los daños y perjuicios por delitos cometidos por sus servidores por motivo del desempeño de sus cargos.

ARTICULO 127. Las obligaciones de restituir, reparar el daño o indemnizar los perjuicios, se transmiten a los herederos del responsable hasta el monto de la herencia, siempre que la acepten a beneficio de inventario.

El derecho de recibir la restitución, reparación o indemnización, se transmite igualmente a los herederos del perjudicado.

En este artículo se señala que la obligación de indemnizar por daños y perjuicios se transmite a los herederos y sus reglas y la restitución también se hereda.

ARTICULO 128. En caso de que la responsabilidad civil haya de reclamarse contra persona distinta de la que realizó el hecho punible o participo en él, la misma se hará efectiva por la vía civil.

En este artículo nos indica las reglas si se reclama indemnización civil contra persona distinta de la que realizó el hecho punible o participo en él.

ARTICULO 129. El Estado estará igualmente obligado a la reparación civil cuando el procesado obtuviere sobreseimiento definitivo después de haber sufrido más de un año de detención preventiva.

En este artículo se refiere a la reparación civil del Estado.

ARTICULO 130. La responsabilidad civil derivada del delito no cesa con el cumplimiento de la pena y sólo se extingue por los medios y en la forma determinados en el Código Civil.

Las causas de extinción de la acción penal y de la pena no se extienden a las obligaciones civiles derivadas del delito.”

Y en este artículo nos indica sobre la responsabilidad civil y su forma de extinción.

Con todos estos artículos señalados podemos indicar que el secuestro civil en sede penal tiene la finalidad de conservar los bienes que se encuentran en poder del imputado de manera que una eventual sentencia condenatoria en contra del imputado y con indemnización a favor de la parte actora no sea ilusoria y el actor pueda ejecutar a su favor bienes del culpable, cumpliendo de esta manera la responsabilidad civil que indican los artículos citados.

Nuestro autor patrio Jorge Fábrega en su obra Medidas Cautelares define

el secuestro como:

“El secuestro es una estructura procesal que comprende actos de parte (solicitud antes de la demanda, con la misma o después de su interposición; consignación de la caución), actos del Tribunal (cognición sumaria, resolución y ejecución de la medida), con un procedimiento determinado in oída parte, mediante el cual a un sujeto se le priva de la disponibilidad de un bien mueble, inmueble o de una universalidad de bienes, al colocarlos fuera del comercio, a efecto de evitar que, durante la secuela del proceso, se menoscaben o reduzcan los intereses del demandante o presunto demandante, sea por actos del demandado, de terceros o de la naturaleza.” (FABREGA P., Jorge. Medidas Cautelares, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez Ltda. Colombia. 1998. p. 82.)

2 2 FINALIDAD

El secuestro civil en sede penal o las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar la indemnización de los perjuicios causados por el delito, asegurando una futura y efectiva reparación de la víctima, impidiendo que se oculten o distraigan bienes que pueden constituir garantía para aquello.

- Identificar y establecer las víctimas, acreditando su calidad sumariamente.
- Determinar el daño por cada víctima, indicando el nexo de causalidad (relación) entre el perjuicio y el delito. Se rige por la proporción frente al daño causado. Se debe establecer la cuantía de la pretensión acreditándola

sumariamente.

- Establecer el juicio de proporcionalidad, determinando la necesidad de la medida solicitada, su utilidad y proporcionalidad respecto al daño causado víctima por víctima.

Como vemos la finalidad del secuestro es garantizar el resultado del proceso y no colocar al titular del secuestro en una posición "semejante al que ha triunfado en su pretensión", en otras palabras, sirve para asegurar la efectividad de la sentencia que en su momento se dicte. En este sentido, las medidas cautelares reales tienen por misión asegurar un conjunto de bienes en los cuales posteriormente se hará efectiva la responsabilidad pecuniaria que se derive del delito.

Por lo tanto, en este punto no debemos olvidar que la acción civil que nace del daño ocasionado por el delito y que se hace valer en sede penal, no deja de ser una acción civil stricto sensu. Ella no pierde su carácter eventual y de protección de un interés esencialmente privado.

Así mismo se destaca la cita de la doctrina expuesta por Héctor Enrique Quiroga Cubillos en su obra "Procesos y Medidas Cautelares", en la cual aclara que el sujeto pasivo del secuestro pierde la libre disposición de los bienes sujetos a esta medida cautelar, y que el petente del secuestro es titular de una especie de derecho real sobre la cosa, pero sin que ello involucre la propiedad, uso, usufructo o derechos de garantía sobre el bien objeto del secuestro.

Por lo tanto el secuestro civil en sede penal tiene como fin que al finalizar

el proceso se encuentren los medios para la ejecución de la acción restaurativa en base al artículo 431 del Código Procesal Penal que indica lo siguiente:

“Artículo 431. Ejecución de la acción restaurativa. Ejecutoriada la sentencia condenatoria y establecida la responsabilidad civil, se promoverá su ejecución ante el Juez o Tribunal que dictó la sentencia respectiva.”

Como podemos observar el secuestro civil en sede penal es una forma de asegurar se pueda solicitar la ejecución de la acción restaurativa para que haya bienes para poder ejercerla pero este no es el tema de esta tesis.

2 3 BASE JURIDICA

Estas medidas responden a lo previsto por las normas constitucionales que protegen el derecho de la víctima a la reparación del daño causado con la comisión del ilícito, y tiene como base la Constitución Política de la República de Panamá, en relación a los derechos fundamentales, el Código Procesal Penal, el Código Judicial, la Ley 31 de 1998, la Ley 67 de 2009 y la Ley 2 de 2010 que son la base de este trabajo y de manera internacional el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que indica lo siguiente “Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” Artículo 8ª de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre,

que dice lo siguiente “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”, Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice lo siguiente “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.”, Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice lo siguiente “1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores.

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo;

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal;

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.

4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su

readaptación social.

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.

6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.

7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Y el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que dice lo siguiente “Artículo 8. Garantías judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
- b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;
- c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
- d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
- e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
- f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
- g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
- h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo

juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.

Como hemos visto los derechos de la víctima tienen resguardo internacional en diferentes instrumentos jurídicos como lo son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, bajo los postulados de igualdad de las partes ante el sistema de administración de justicia y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

También tenemos que la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, cita igualmente un catálogo de derechos a favor de las víctimas las cuales han de ser ejercitadas bajo la comprensión de que las víctimas no son objeto del proceso sino sujetos del mismo en igualdad de condiciones, derechos y garantías.

2 4 BASE ARGUMENTATIVA PARA SOLICITAR LA MEDIDA DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL

- Acreditación sumaria de la calidad de víctima.
- Acreditar la naturaleza del daño, señalando una valoración aproximada de los perjuicios de orden material y/o moral que puedan preverse al momento de solicitar la medida.

- Señalar la utilidad, necesidad y proporcionalidad de la medida. La utilidad se refiere a por qué esta medida real es la adecuada para la efectiva reparación del daño producido con el delito, en consideración a la naturaleza del daño y a la pretensión de la víctima; la necesidad, respecto al porqué de solicitar esta medida y no otra, para la obtención de la reparación del daño; y la proporcionalidad, en cuanto a la determinación que la cuantía del embargo, resulta equivalente a la naturaleza del daño producido con la infracción, debiendo limitarse a lo necesario para proteger el eventual derecho a la indemnización.

- Acreditar la propiedad del bien sobre el cual se va a materializar la medida real, en cabeza del imputado o acusado.

- Prestar la caución fijada por el juez de garantías.

Se utiliza como base de esta información el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá.

2 5 SUJETOS

Esta figura requiere de sujetos activos y pasivos.

El Diccionario de Derecho Procesal Penal define a los sujetos procesales de la siguiente manera:

"Sujetos Procesales: Son todas aquellas personas que actúan dentro de la dinámica del procedimiento penal y para los cuales la ley tiene previstas específicas disposiciones normativas. Son éstas el Juez, el Ministerio Público, el

Imputado, la Víctima, la Policía Judicial, el Secretario Judicial y demás auxiliares del Juez, el Fiador, el Tercero Incidental (sic), entre otros. Una vez ejercida la acción penal, solamente algunos de los s.p. (sic) se convierten en "partes" del proceso, es decir en sujetos cuyas pretensiones jurídicas e intereses deben ser decididos por el juez, Se trata del imputado el ministerio público (sic), como sujetos necesarios, a los que eventualmente pueden agregarse, la parte civil, el querellante y el tercero civilmente responsable". (CUESTAS G., Carlos H., Diccionario de Derecho Procesal Penal, Colecciones Judiciales, publicación de la Escuela Judicial, Panamá, 2000 Págs. 71 y 72.)

Pero para fines de esta figura solo necesitamos los que mencionaremos a continuación.

2 5 1 SUJETOS ACTIVOS

Son sujetos activos de las medidas cautelares reales o Secuestro Civil en sede penal son la víctima y el querellante debidamente constituido.

2 5 1 1 LA VICTIMA

La víctima es el sujeto pasivo del delito; es, en general, la persona que ha sufrido el daño o consecuencia de un hecho delictivo. Pueden participar en el proceso penal y tiene el derecho a ser oídos y protegidos ante cualquier probabilidad de riesgo.

El artículo 79 del Código Procesal Penal define como víctima así

“Artículo 79. La víctima. Se considera víctima del delito:

1. La persona ofendida directamente por el delito.
2. El cónyuge, el conviviente en unión de hecho, los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y los herederos de la persona ofendida.
3. Los socios, en relación con los delitos que afecten a una sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administran, gerencian o controlan.
4. Las asociaciones reconocidas por el Estado, en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, conlleven graves perjuicios patrimoniales para el Estado o afecten servicios públicos, siempre que el objeto de la asociación se relacione directamente con esos intereses.
5. Las instituciones y entes públicos afectados en los casos de delitos contra la Administración Pública y contra el patrimonio económico, o cuando por cualquier circunstancia se encuentren afectados sus bienes.
6. En general, toda persona que individual o colectivamente haya sufrido daños y/o lesiones físicas, mentales o emocionales, incluyendo la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos, como consecuencia de acciones que violen la legislación penal vigente, con independencia de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al infractor y de la relación familiar existente entre ellos.”

La palabra víctima proviene del latín “víctima”, “(Del lat. Víctima). 1. f. Persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. 2. f. Persona que se expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra. 3. f. Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita. 4. f. Persona que muere por culpa ajena o por accidente fortuito”. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. <http://rae.es./drael/SrvltGUIBusUsual>.) Por su parte, Luís Rodríguez Manzanera dice que "se designa a la persona o animal sacrificado o que se

destina al sacrificio” (RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Victimología, Quinta Edición. Editorial Porrúa. México. 1999. p. 55.), estas definiciones se toman en sentido lato y sobretodo en referencia a su sentido natural de la palabra.

Para Mendelsonhn víctima “Es la personalidad del individuo o de la colectividad en la medida en que está afectada por las consecuencias sociales de sufrimiento, determinado por factores de origen muy diverso, físico, psíquico, económico, político o social; así como el ambiente natural o técnico”. (RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis. Victimología. Op. Cit., p. 57.)

Para la Sociología es víctima “la persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en sus bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha acción”. (FAIRCHILD, Henry Pratt, Diccionario de Sociología, FCE, México, 1980, p. 311.)

Así también tenemos el concepto que adoptó la Organización de las Naciones Unidas consistente que es importante para los individuos, sobre todo el de la Organización de las Naciones Unidas, en el VI Congreso (Caracas 1980) y el VII Congreso (Hilan 1985), donde se planteó que el término “víctima”, puede indicar que la persona ha sufrido una pérdida, daño o lesión, sea en su persona propiamente dicha, su propiedad o sus derechos humanos, como resultado de una conducta que:

- a) Constituya una violación a la legalización penal nacional.
- b) Constituya un delito bajo el derecho internacional, que constituya una violación a los principios sobre derechos humanos reconocidos

internacionalmente.

c) Que alguna forma implique un abuso de poder por parte de personas que ocupan posiciones de autoridad política o económica.

En el VII Congreso de las Naciones Unidas, se llegó a la conclusión de manejar a las víctimas en dos grupos: las víctimas de delitos y los de abuso de poder, mismos que quedaron definidas en la declaración sobre los principios fundamentales de justicia relativos a las víctimas, en la forma siguiente:

A).- Víctimas de delitos (artículo 1º.), “Se entenderá por víctimas las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que prescribe el abuso del poder”.

B).- Víctimas del abuso del poder: (artículo 18).- “Se entenderá por víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones, físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero violan normas internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos”.

La autora Aida J. Jurado Zamora sobre víctima indica lo siguiente:

Se comprende como víctima aquella persona natural o jurídica que directa

o indirectamente resulte ofendida por la acción delictiva. El Código Procesal Penal, enfatiza en el artículo 79 quienes son las personas que adquieren calidad de víctimas dentro del proceso penal, siendo éstas las siguientes:

- La persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, incluidas las lesiones haya sufrido daños, incluidas las lesiones físicas o mentales, el sufrimiento emocional, la pérdida financiera o el menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acción o omisión que viole la legislación penal vigente.
- El representante legal o tutor de la persona directamente afectada por el delito en caso de incapacidad, al cónyuge, al conviviente en unión de hecho, a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como al heredero testamentario cuando acuse la muerte del causante.
- Las asociaciones, reconocidas por el Estado, en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses. (JURADO ZAMORA, Aida J., Guía práctica para el estudio de los Principios, Garantías y Reglas del Proceso Penal Panameño: un enfoque acusatorio. Editora Novo Art. S.A., Panamá, 2009, Pág. 104 y 105.)

Sobre este tema también el autor español José Martínez Jiménez indica lo siguiente:

“Concepto general de víctima.- El Derecho Procesal Penal ha manejado tradicionalmente los conceptos de ofendido y perjudicado, cuya diferencia, según la doctrina penal, consiste en que aquél es el sujeto pasivo del delito, titular del bien jurídico tutelado por la norma penal transgredida, mientras que éste es el que sufre en su esfera patrimonial los efectos nocivos de la acción. La cualidad de ofendido es, como regla general, personal e intransmisible, en tanto que la de perjudicado es susceptible de sucesión procesal.

La consecuencia práctica de esta distinción es que el ofendido es quien ostenta la legitimación activa para el ejercicio de la pretensión penal, en tanto que el perjudicado la tiene para el ejercicio de la pretensión civil de resarcimiento, si bien a ambos ha de hacerse el llamado ofrecimiento de acciones. Por su parte, la LECrim, aunque en ocasiones utiliza indistintamente y sin demasiado rigor los términos perjudicado y ofendido, en general los diferencia netamente en el sentido doctrinal antes expresado.

Sobre este esquema, la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, ha introducido un nuevo concepto, el de víctima, y lo ha perfilado en términos tan amplios que prácticamente engloba tanto al ofendido como al perjudicado, excluyéndose expresamente de la categoría de víctima únicamente a los terceros que hayan sufrido perjuicios derivados del delito (art. 2, párrafo segundo).

En efecto, partiendo de la distinción entre víctimas directas e indirectas, preceptúa el art. 2 que “las disposiciones de esta Ley serán aplicables:

a) Como víctima directa, a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos directamente causados por la comisión de un delito.

b) Como víctima indirecta, en los casos de muerte o desaparición de una persona que haya sido causada directamente por un delito, salvo que se tratare de los responsables de los hechos:

1.º A su cónyuge no separado legalmente o de hecho y a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte

o desaparición de la víctima convivieran con ellos; a la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y a los hijos de ésta que en el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; a sus progenitores y parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda y a las personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar.

2.º En caso de no existir los anteriores, a los demás parientes en línea recta y a sus hermanos, con preferencia, entre ellos, del que ostentara la representación legal de la víctima”. (MARTÍNEZ JIMÉNEZ, José. Derecho Procesal Penal. Editorial Tecnos. Última revisión 12 de enero de 2016, Pág. 5-7.)

Este sujeto activo debe actuar por medio de un apoderado judicial idóneo y sin quien solicita la medida es una persona jurídica, debe acreditarse la personería y la capacidad para representarla.

2 5 1 2 QUERELLANTE DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

Cuando la víctima del delito, mediante apoderado judicial, formaliza querella ante el Ministerio Público y éste, previo al análisis de las condiciones de fondo y forma requeridas en el artículo 89 del Código Procesal Penal, admite la misma.

Debemos indicar que la querella es una declaración o acusación que efectúa una persona mediante la cual se notifica a un Juez la concurrencia de unos sucesos determinados que se piensa que pueden ser propios de un delito.

En esa declaración por escrito la persona que la efectúa (denominada

querellante) expresa la voluntad de formar parte del procedimiento (si así procediese) como parte acusadora. Es por ello que, se define la querella como “la forma por la cual un particular ejerce la acción penal y se vuelve parte de un proceso penal”.

2 5 2 SUJETOS PASIVOS

Son sujetos pasivos de las medidas cautelares reales o secuestro civil en sede penal: el imputado y el tercero civilmente responsable.

2 5 2 1 PERSONA IMPUTADA

Es aquella a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el Juez de Garantías. Es la parte pasiva necesaria del proceso penal, la persona contra la que se dirige la acción penal.

Anteriormente con el Código Judicial se consideraba la definición de imputado que contenía el artículo 2036 del Código Judicial, que señalaba como tal a "toda persona que en cualquier acto del proceso sea sindicado como autor o partícipe de un delito". De manera que sólo cuando se adquiere esa calidad de imputado, por ser acusado como autor o partícipe de un hecho punible, el afectado podrá hacer uso de los medios impugnativos y de defensa que la ley tiene establecidos.

En la actualidad con el código procesal penal en su artículo 92 indica lo siguiente: “Artículo 92. Concepto. Imputada es la persona a quien se le han

formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el Juez de Garantías. Formalizada la acusación penal en su contra, pasa a denominarse acusado.”

Como podemos observar se denomina a aquella persona a la cual se le atribuye la comisión de un determinado delito o su participación en algún acto delictivo.

Conforme lo que nos expresa la real academia española imputar, proviene del latín imputare, y significa atribuir a otro la culpa, delito o acción. (JAUCHEN, Eduardo. Derechos del Imputado. Rubinzal Culzoni Editores. Pág. 13.) También podemos afirmar sin temor a equívocos que imputado es el sujeto contra el cual se dirige la pretensión punitiva y contra quien se hace efectivo el poder punitivo estatal.

El autor Julio Maier, para dar una definición aproximada, de cuál es el concepto de imputado, expresa que imputado es “la persona contra la cual se ejerce la persecución penal precisamente porque alguien indica que ella es la autora de un hecho punible o ha participado en él, ante las autoridades competentes para la persecución penal”. (MAIER B. J., Julio. Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Tomo II Pág. 188.)

2 5 2 2 TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

Persona natural o jurídica que, según las leyes, responda por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho punible en tendido siendo la persona natural o jurídica que debe entrar a responder solidariamente por los perjuicios

ocasionados, según los parámetros de la responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, teniéndose como base el artículo 108 del Código Procesal Penal.

Anteriormente con el Código Judicial se definía de la siguiente forma

En cuanto a nuestra legislación, el Capítulo III relativo a los Sujetos Procesales contenido en el Título I del Libro III del Código Judicial, de manera específica regulaba la figura del tercero incidental en los artículos 2028, 2029 y 2030.

El artículo 2028 definía el concepto de tercero incidental al especificar, que es toda persona natural o jurídica que sin estar obligada a responder patrimonialmente por razón del hecho punible, tiene un derecho económico afectado en el proceso, en otras palabras el tercero incidental sólo tendrá participación dentro de la causa penal en los aspectos relativos al derecho económico afectado.

En la actualidad con el Código Procesal Penal se define en los artículos 108 y 109 de la siguiente forma:

“Artículo 108. Concepto. Se entiende por tercero responsable a la persona natural o jurídica que, según las leyes, responda por el daño que el imputado hubiera causado con el hecho punible.

Artículo 109. Participación del tercero civilmente responsable. El Ministerio Público y la víctima solicitarán al Juez de Garantías la citación del tercero civilmente responsable a la audiencia de formulación de acusación, en la cual deberá ofrecer la evidencia de descargo que llevará al juicio oral y se debatirá su admisibilidad.”

Ya vimos las definiciones que nuestro derecho sustantivo daba antes y ahora a esta figura, pero que es un tercero civilmente responsable.

En la doctrina se indica lo siguiente:

Víctor Cubas Villanueva, señala que el “(...) Tercero Civilmente Responsable es la persona natural o jurídica que sin haber participado en la comisión del delito, tiene que pagar sus consecuencias económicas. Su responsabilidad nace de la ley civil y no de una ley administrativa o de otra índole; es por ejemplo, la responsabilidad de los padres, tutores o curadores por los actos que cometan sus hijos menores, sus pupilos o los mayores sometidos a curatela; la responsabilidad de los patronos por los actos ilícito cometidos por sus dependientes; la responsabilidad del propietario del vehículo por los hechos practicados por el conductor (...)”. (CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El Proceso Penal, Teoría y Práctica, Palestra Editores, Lima 1998, Pág. 122 y 123.)

César San Martín Castro, citando a Eduardo Fong Serra, sostiene que se “(...) requiere del cumplimiento de dos requisitos: a) el responsable directo o principal está en una relación de dependencia (el responsable principal no debe actuar según su propio arbitrio, sino sometido – aunque sea potencialmente – a la dirección y posible intervención del tercero); y, b) el acto generador de la responsabilidad haya sido cometido por el dependiente en el desempeño de sus obligaciones y servicios (...)”. (SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio: Derecho Procesal Penal – Tomo I, Editora Grijley, Lima 2006, Pág. 295.)

En España son más específicos en sus normas y los señalan de la

siguiente forma:

- En primer lugar las aseguradoras que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en la ley se produzca el evento que determine el riesgo asegurado.
- También son responsables por los hechos que ejecuten los declarados exentos de responsabilidad penal quienes los tengan bajo su potestad o guarda legal o hecho, siempre que haya mediado culpa o negligencia por su parte y sin perjuicio de la responsabilidad civil directa que pudiera corresponder a los imputables.
- Son responsables el ebrio y el intoxicado.
- Serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.
- Responderán principalmente los que hayan causado el miedo, y en defecto de ellos, los que hayan ejecutado el hecho.

Son también responsables civilmente, en defecto que lo sean criminalmente.

- Los padres o tutores, por los daños y perjuicios causados por los delitos cometidos por los mayores de dieciocho años sujetos a su patria potestad o tutela y que vivan en su compañía, siempre que haya por su parte culpa o

negligencia.

- Las personas naturales o jurídicas titulares de editoriales, periódicos, revistas, estaciones de radio o televisión o de cualquier otro medio de difusión escrita, hablada o visual, por los delitos cometidos utilizando los medios de los que sean titulares.
- Las personas naturales o jurídicas en los casos de delitos cometidos en los establecimientos de los que sean titulares, cuando por parte de los que los dirijan o administren, o de sus dependientes o empleados, se hayan infringido los reglamentos de policía o las disposiciones de la autoridad que estén relacionados con el hecho punible cometido, de modo que éste no se hubiera producido sin dicha infracción.
- Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios.
- Las personas naturales o jurídicas titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros, por los delitos cometidos en la utilización de aquéllos por sus dependientes o representantes o personas autorizadas.
- También la responsabilidad civil subsidiaria puede alcanzar a los entes públicos por los delitos, dolosos o culposos, cometidos por autoridades, agentes y funcionarios públicos, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados.

- Incluso existe un caso especial de responsabilidad civil es el del partícipe a título lucrativo de la siguiente forma: el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.

La fuente para esta información es el libro Derecho Procesal Penal del autor José Martínez Jiménez, Fiscal español.

Por todo lo anterior el Tercero Responsable Civilmente o Tercero Civil es la calidad legal que adquiere una persona natural o jurídica, que no ha intervenido ni participado en un evento delictivo, pero que en virtud a una obligación impuesta por la ley civil, tiene la responsabilidad de solidarizarse con el condenado para responder por la Reparación Civil establecida en una sentencia penal.

2 6 SOBRE QUE RECAEN

Recae sobre bienes sujetos a registro que sean propiedad del imputado como inmuebles o muebles (naves, aeronaves, títulos de valores nominativos, certificado de depósito a término y acciones, vehículos automotores y establecimientos de comercio).

Como hemos visto esta figura se da sobre bienes del imputado por lo que debemos ver que son bienes.

2 7 BIENES

Los bienes, de acuerdo con el artículo 324 del Código Civil, son: “Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación se consideran como bienes, muebles o inmuebles.”

La doctrina española define cosa como una realidad física que se manifiesta de forma tridimensional en el espacio. En la medida en que esa cosa pueda reportar una utilidad, se habla de bien.

Existen varias clasificaciones de bienes, entre las que se destacan:

Bienes corporales: son aquellos que tienen una existencia física apreciable por los sentidos. Ejemplo: vehículos.

Bienes incorporeales: son los que no tienen existencia física, sin cuerpo. Ejemplo: gas y luz eléctrica.

Bienes muebles: son los susceptibles de ser trasladados de un sitio a otro. Ejemplo: computador.

Bienes inmuebles: cosa estática en un espacio. Ejemplo: edificio.

Bienes tangibles: son aquellos que se pueden tocar. Ejemplo: obra de arte.

Bienes intangibles: son los que no se pueden tocar. Ejemplo: propiedad intelectual.

Bienes materiales: son objetos físicos dotados de forma, dimensiones y peso. Ejemplo: televisor.

Bienes inmateriales: no son físicos. Generalmente representan derechos. Ejemplo: Propiedad intelectual (derechos de autor), propiedad industrial (marcas

y patentes), créditos y servidumbres.

Bienes muebles fungibles: cosas que en el comercio se determinan en su número por medida o peso y por regla general son sustituibles por otros de la misma naturaleza, se consumen con el uso y se deterioran con facilidad. Ejemplo: productos perecederos (dinero y alimentos).

Las clases de bienes referidas pueden ser utilizadas para cualquiera de las funciones del bien dentro del proceso penal.

2 8 PROCEDIMIENTO

2 8 1 SOLICITUD DE SECUESTRO

La solicitud de secuestro deberá ser presentada por escrito por el apoderado legal de la víctima del delito, debidamente constituido en querellante.

(Artículo 268 del Código Procesal Penal)

“Artículo 268. Otras medidas cautelares. El querellante podrá solicitar por escrito al Juez de Garantías que decrete, respecto de los bienes del imputado o del tercero civilmente responsable, una o más de las medidas cautelares reales autorizadas en el Título II del Libro Segundo del Código Judicial. En estos casos, las solicitudes respectivas se sustanciarán de acuerdo con las normas de procedimiento civil y tendrán por objetivo asegurar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios provocados por el hecho punible.”

Dicha solicitud deberá entregarse directamente al Juez de Garantía en turno, en sobre cerrado, esta es una sugerencia del proyecto de manual de Secuestro Civil en Sede Penal.

La solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación:

- a) Copia Autenticada del poder y la Querella presentada ante el Ministerio Público.
- b) Copia Autenticada de la Resolución mediante el cual el Ministerio Público tiene por admitida la querella.
- c) Documentación que acredite la propiedad del bien objeto del secuestro, cuando se trate de bienes susceptibles de inscripción. (Certificación del Registro Público, Certificación del Registro Único Vehicular, Certificación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras)

En sí esta es una sugerencia hecha por el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá basada en la práctica tribunalicia de los Juzgados de Circuito civiles y la experiencia.

2 8 2 ADMISIÓN DEL SECUESTRO

Para que proceda la admisión de la solicitud del secuestro, el Juez de Garantías tomará en consideración los siguientes aspectos:

- 1) Que conste la documentación adjunta necesaria.
- 2) Que en el escrito de secuestro se identifique de forma clara la siguiente información (Artículo 531, numeral 3 del Código Judicial):

“Artículo 531. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas cautelares se regirán por las siguientes reglas:

- 1. En los procesos no contenciosos sólo proceden las medidas cautelares expresamente determinadas por la

ley;

2. Las medidas se tramitarán sin audiencia del demandado o presuntivo demandado, en cuaderno separado, que forma parte del expediente principal;

3. En el escrito en que se solicita una medida asegurativa, bastará expresar el nombre de las partes, reales o presuntivas, la medida que se solicita; el objetivo y la cuantía del proceso a que haya de acceder;

4. Las medidas serán requeridas al juez competente para conocer del proceso principal, sin necesidad de repartos;

5. El juez procurará en todo momento evitar daños y perjuicios y molestias innecesarias en la adopción o ejecución de la medida y podrá de oficio y bajo su personal responsabilidad, sustituir la medida, en el acto de la ejecución, oyendo al actor y, si fuere viable, al demandado o presunto demandado, siempre que queden plenamente asegurados los intereses del actor;

6. Para garantizar los daños y perjuicios que se puedan causar, se señalará caución. Las cauciones se fijarán de acuerdo con lo que para cada caso se dispone y se consignarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 570. El auto que fije la cuantía, el que acepte la caución y el que la rechace, son apelables en el efecto devolutivo. Si el superior aumenta la cuantía de la caución, deberá complementarse en un término de tres días, contado desde la notificación del reingreso del expediente al juzgado de origen y, si dentro de dicho término no se complementa, se procederá a reducir proporcionalmente el objeto de la medida;

7. Excepto en los casos de pretensiones reales, el demandado podrá solicitar, antes de que se adopte la medida, durante su ejecución o después de adoptada, que se evite, revoque o levante, siempre que, a juicio del juez, ofrezca bienes suficientes en garantía;

8. Las oposiciones y las impugnaciones incidentales se surtirán oralmente en el momento en que se ejecuta la medida, o posteriormente en el tribunal, si ya se hubieren practicado, sin formalidades especiales, sin suspender ni interrumpir la adopción o ejecución de la medida, permitiendo a las partes presentar sus pruebas y alegaciones sumarias, y procurando siempre la mayor celeridad posible. El juez hará una lacónica relación de

lo aprobado y alegado, y resolverá en el acto lo que corresponda;

9. El juez goza de poderes adecuados para adoptar las decisiones que fueren necesarias, sancionar en el acto al que estorbare la ejecución de la medida, con arreglo al artículo 1933 y empleará la Fuerza Pública si fuese necesario;

10. Las resoluciones que decretan o rechacen las medidas cautelares admiten apelación, pero la interposición del recurso en ningún modo suspende ni interrumpe la ejecución de la medida; y

11. Salvo lo dispuesto para casos especiales, se levantarán las medidas cautelares en los siguientes supuestos:

a. Cuando el demandante no presentare su demanda dentro de los seis días siguientes a la fecha de practicada la medida; o

b. Cuando no se hubiere hecho la notificación dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la demanda y el demandante no haya pedido el emplazamiento, o si puestos a su disposición los edictos para su publicación, no los haya hecho publicar en los treinta días siguientes.”

- Identificación completa de la persona indiciada, imputada o el tercero civilmente responsable; según el estado en que se encuentre el proceso.
- Identificación clara y detallada del bien o bienes objeto del secuestro
- La suma por la cual se pide el secuestro (debe ser igual o inferior a la cuantía provisional de los daños que se fijan en el escrito de querella, Artículo 88 numeral 4 del Código Procesal Penal)

“Artículo 88. Escrito de querella. La querella será presentada por escrito a través de apoderado judicial y deberá expresar lo siguiente:

1...

2...

3...

4. Los hechos y motivos en que se funda la acción civil y la cuantía provisional del daño cuya reparación se pretende.”

- El objeto de la medida asegurativa.

Una vez recibido el escrito de secuestro, se recomienda al Juez de Garantías en turno, resolver la admisibilidad de la solicitud en un plazo no mayor de 24 horas.

Sugerencia hecha por el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá, esta sugerencia se basa en que la medida cautelar de secuestro debe tener prioridad.

En la resolución que admite el secuestro, se fijará el monto de la caución y se establecerá un término de TREINTA (30) DÍAS para hacer efectiva la misma, con fundamento en los Artículos 465, 466 y 510 del Código Judicial y 119 numeral 9 de la ley 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial.

“Artículo 465. El impulso y la dirección del proceso corresponden al juez, quien cuidará de su rápida tramitación sin perjuicio del derecho de defensa de las partes y con arreglo a las disposiciones de este Libro.

Artículo 466. Promovido el proceso, el juez tomará las medidas tendientes a evitar su paralización, salvo que la ley disponga que ello corresponda a las partes.

Artículo 510. El juez fijará los términos cuando la ley no los haya fijado, de conformidad con la naturaleza del proceso y la importancia del acto o diligencia, procurando siempre que no exceda de lo necesario para los fines consiguientes.

Estos términos son prorrogables, por una vez siempre que el juez considere justa la causa invocada y que la

solicitud se formule antes del vencimiento. La respectiva resolución será irrecurrible.

Artículo 119. Deberes de magistrados y jueces. Son deberes en general de los magistrados y Jueces:

- 1....
- 2....
- 3....
- 4....
- 5....
- 6....
- 7....
- 8....
9. Dirigir los procesos de su conocimiento y procurar la mayor Economía Procesal.”

2 9 CASOS EN QUE NO SE ADMITE UNA SOLICITUD DE SECUESTRO

El secuestro no será admitido cuando carezca de alguno de los requisitos formales establecidos en el artículo 531 del Código Judicial y 268 del Código Procesal Penal ya señalados.

El auto que no admite el secuestro es apelable en el efecto devolutivo, en atención a lo que disponen los artículos 531 numeral 10, 1138 numeral 2 y 1139 numeral 3 del Código Judicial y Artículo 169 numeral 6 del Código Procesal Penal.

“Artículo 531. Sin perjuicio de lo dispuesto para casos especiales, las medidas cautelares se regirán por las siguientes reglas:

- 1...
- 2...
- 3...
- 4...
- 5...

6...

7...

8...

9...

10. Las resoluciones que decretan o rechacen las medidas cautelares admiten apelación, pero la interposición del recurso en ningún modo suspende ni interrumpe la ejecución de la medida...”

“Artículo 1138. Las apelaciones podrán concederse en los siguientes efectos:

1...

2. En el devolutivo, caso en el cual no se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada ni el curso del proceso...”

“Artículo 1139. Salvo expresamente lo establecido para casos especiales, las apelaciones se concederán:

1...

2...

3. El devolutivo, cuando se trate de cualquier otro auto o resolución que ordene, decida o imprima tramitación...”

“Artículo 169. Resoluciones apelables. Son apelables las siguientes resoluciones:

1...

2...

3...

4...

5...

6. La que decide o resuelve las medidas cautelares personales o reales, sin suspender la ejecución de la medida...”

2 10 FIJACIÓN DE LA CAUCIÓN

El Juez de Garantía fijará la caución de forma discrecional, tomando en consideración lo siguiente (Artículo 533 del Código Judicial ya señalado):

- a) Valor y naturaleza del bien o de los bienes que se van secuestrar.
- La suma por la cual se pide el secuestro (debe ser igual o inferior a la cuantía provisional de los daños que se fijen en el escrito de querella, Artículo 88 numeral 4 del Código Procesal Penal ya señalado)
- a) Los posibles daños y perjuicios que se puedan ocasionar al propietario del bien o de los bienes.

En el artículo 533 del Código Judicial, que ordena al juez fijar caución para responder por los daños y perjuicios que se puedan causar por razón del secuestro, consignación que es imprescindible para que proceda la adopción y ejecución de esta medida cautelar.

La caución no puede ser irrisoria ni excesiva, por lo que se tomará como medida de referencia la siguiente tabla de porcentajes utilizada en los Juzgados Civiles de la República de Panamá en virtud de un convenio entre los Jueces del Circuito de Panamá:

Tipo de Bien	Porcentaje
Cuentas Bancarias / Dinero	20%
Bienes Muebles	25%
Bienes Inmuebles	30%
Bienes Inmuebles con otros bienes	35%
Administración	40%

2 10 1 CAUCIONES

La adopción del Secuestro Civil en sede penal está subordinado a la prestación de caución bastante y adecuada “correlativa a la limitación o dificultad que su aplicación reporte al que la padece” que garantice los daños y perjuicios que puedan originarse al patrimonio del sujeto pasivo que las soporta. Tiene carácter necesario e imprescindible, pues ni aún en situaciones de urgencia es posible prescindir de su prestación; de forma que, salvo que expresamente el precepto legal específico la dispense, el solicitante habrá de ofrecer caución aseguradora de los daños que pueda irrogar su concesión.

La caución puede consistir en:

- a) Dinero en efectivo
- b) Hipotecas
- c) Fianzas de compañías de seguros
- d) Cartas de Garantía Bancaria
- e) Títulos de Deuda Pública del Estado

Cuando la garantía sea en dineros o títulos de deuda pública, el interesado deberá consignarlos en el Banco Nacional de Panamá, a través de un Certificado de Depósito Judicial en base al Artículo 570 del Código Judicial la Ley 67 de 2009 que regula la certificación de depósito judicial y dicta las normas de adecuación correspondientes y la Ley 2 de 2010 que modifica un artículo de la Ley 67 de 2009).

“Artículo 570. Siempre que este Código requiera que

una parte de caución, la garantía consistirá en dinero efectivo, hipotecas, bonos del Estado, fianza de compañías de seguro o cartas de garantía bancaria.

Cuando la garantía sea en dinero o en bonos del Estado, el interesado deberá consignarlos en el Banco Nacional y obtener un certificado de garantía que presentará al tribunal. Las sumas de dinero depositadas para la adquisición de certificados de garantía devengarán intereses a la tasa comercial que prevalezca en la plaza, pagaderos a la devolución del valor consignado.

Cuando la garantía sea hipotecaria, el bien no podrá tener ningún otro gravamen anterior ni se admitirá hipoteca que no sea de primer orden, es decir, el bien gravado con hipoteca anterior no podrá ser admitido para caución.

Cuando se trata de garantías otorgadas por compañías de seguro o por entidades bancarias, éstas responderán por los resultados del proceso hasta su terminación, y no se aceptarán cuando sean otorgadas por ellas en su propio interés y en procesos en que las mismas sean parte.”

Como lo indica el artículo transcrito cuando la garantía sea hipotecaria, el bien no podrá tener ningún gravamen anterior. Tampoco se admitirá hipoteca que no sea de primer orden, es decir, que el bien no mantenga otras hipotecas adicionales a la primera.

Además cuando se trate de garantías otorgadas por compañías de seguro o por entidades bancarias, estas responderán por los resultados del proceso hasta su terminación. No se aceptarán cuando sean otorgadas por las entidades bancarias o compañías de seguros en su propio interés y en procesos en que sean parte.

Es importante tener presente que en nuestra legislación, el secuestro

como medida cautelar se practica inoída parte, previa presentación de caución por quien solicita la medida, con la finalidad que se limite el derecho de disponer de bien de quien detente su propiedad, de afectar a terceros una vez inscrito el secuestro en el Registro Público, y de asegurar las resultas del proceso, evitándose que el bien se pierda totalmente, desmejore sustancialmente su condición o sea objeto de disposición u ocultamiento en detrimento del petente, en caso de obtener un fallo positivo del ente jurisdiccional una vez finalizado el proceso. Es decir, para que éste no resulte ilusorio.

La caución por su parte se exige para garantizar el posible perjuicio que se pueda irrogar al demandando, ya que el solo secuestro lleva implica la posibilidad de que sobrevengan daños, aun cuando se tomen las provisiones para evitar cualquier molestia dentro del marco legal. No obstante, el perjuicio puede verificarse en la medida en que el titular del bien objeto del secuestro queda imposibilitado para realizar operaciones o utilizar el bien sujeto a esta medida.

2 11 SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL SIN CAUCIÓN

Existe la posibilidad que se pueda decretar el secuestro civil en sede penal sin afianzar caución sobre este tema y ya que el Código Procesal Penal en esta materia remite al Código Judicial el artículo 1172 indica lo siguiente:

“Artículo 1172. El Recurso de Casación suspende la ejecución de la resolución impugnada. Sin embargo, el demandante favorecido por una sentencia de segunda

instancia, que condena al demandado, podrá obtener un secuestro o cualquier otra medida cautelar que reconozca la ley, sin necesidad de fianza.”

Como vemos en nuestra legislación procesal civil existe una forma de poder decretar un secuestro sin necesidad de fianza en casos de casación y en el artículo 180 del Código Procesal Penal se regula la figura de la casación de la siguiente forma:

“Artículo 180. Objeto del recurso de casación. El recurso de casación tiene por objeto enmendar los agravios inferidos a las partes en las resoluciones judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada. También tiene por objeto procurar la exacta observancia de las leyes por parte de los tribunales y uniformar la jurisprudencia nacional. En consecuencia, tres decisiones uniformes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de Casación, sobre un mismo punto de Derecho, constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarla a los casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte varíe de doctrina cuando juzgue erróneas las decisiones anteriores.”

Sobre este tema la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal ya se había pronunciado en su fallo de fecha 21 de septiembre de 2006 utilizando los parámetros de la ley 31 de 1998 de la Protección a las Víctimas del Delito, pero es perfectamente viable ahora de esta forma:

“La Sala advierte que ciertamente en nuestro ordenamiento jurídico vigente, el legislador introdujo pautas que consagran derechos a favor de aquellas personas consideradas como víctimas de un delito. Así se aprueba la ley 31 de

28 de mayo de 1998 "De la Protección a las Víctimas del Delito", donde expresamente se garantiza a las víctimas o personas afectadas por un hecho punible, no sólo participar en el proceso o exigir la responsabilidad penal, sino también, el obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito y el solicitar el secuestro a efectos de evitar que el juicio sea ilusorio en sus efectos.

No obstante debe precisarse, que si bien el artículo 1172 del Código Judicial, aplicable en la esfera penal, concede a la parte favorecida por una sentencia de segunda instancia, que en el negocio sub-judice lo constituyen los querellantes, acción para solicitar en casación, secuestro o cualquier otra medida cautelar de tipo patrimonial a efectos de garantizar la posible condena en concepto de responsabilidad civil derivada del delito, lo cierto es que, no es la Sala de lo Penal, la instancia competente para conocer de este tipo de solicitudes, sino que la misma corresponde al tribunal de la causa.

Lo anterior encuentra además respaldo, en el ordinal 1º del artículo 1138 del Código Judicial, que establece que en el supuesto de recurso, el juez de primera instancia conserva la competencia para conocer de asuntos relacionados con secuestro y conservación de bienes.

Por todo lo anterior consideramos que es perfectamente viable que se pueda dar esta situación en base del Código Procesal Penal vigente.

2 12 AUTO QUE FIJA LA CAUCIÓN

El auto que fija la caución es apelable en el efecto devolutivo. Base jurídica Artículo 531 numeral 6, 1138 numeral 2 y 1139 numeral 3 del Código Judicial y Artículo 169 numeral 6 del Código Procesal Penal.

Si el Tribunal Superior de Apelaciones modifica la cuantía de la caución, aumentándola, la parte interesada tendrá un término de tres (3) días para complementar la caución, contados a partir de la notificación del reingreso del expediente al Juzgado de Garantías; de no hacerlo en este término, se procederá a reducir proporcionalmente el objeto de la medida en base al Artículo 531 numeral 6, del Código Judicial.

2 12 1 VARIACIÓN DEL MONTO DE LA CAUCIÓN

Cuando el secuestro se pida por una suma inferior a la cuantía de la demanda y el bien secuestrado o que se va a secuestrar tiene un valor mayor, la caución se aumentará o se fijará, según el caso, en relación al valor del bien objeto del secuestro base jurídica artículo 534 del Código Judicial.

Este artículo regula dos situaciones:

- Cuando la parte interesada solicita el secuestro por una suma inferior al valor del bien, y el Juez se percata de esta situación antes de fijar la caución.

En este primer supuesto, el Juez de Garantías a consecuencia de la facultad discrecional que le concede la Ley (artículo 533 del Código Judicial), fijará la caución en atención al valor y naturaleza del bien, sin tomar en cuenta la cuantía del secuestro, a fin de garantizar que la misma no sea irrisoria.

- Cuando ya se ha fijado una caución y posterior a ello el Juez tiene conocimiento por percepción propia o por advertencia de parte interesada, que el bien objeto del secuestro tiene un valor mayor que la cuantía del secuestro.

En este caso, el Juez de Garantías ordenará a la parte que sustituya o constituya una caución adicional, a fin de que represente el valor real del bien que garantizan.

En caso de que el Juez de Garantías tenga conocimiento de esta situación por percepción propia, podrá variar la caución de oficio, mediante Resolución motivada, por escrito. Esta resolución es apelable en el efecto diferido. (Artículos 571, 1138 numeral 3 y 1139 numeral 2 del Código Judicial y Artículo 169 numeral 6 del Código Procesal Penal).

Si al Juez se le imposibilita conocer dicha condición de exceso en el secuestro, pero la parte interesada (indiciado, imputado o tercero civilmente responsable) así se lo hace saber, éste deberá resolver esta oposición en audiencia oral, en atención a lo que señala el numeral 8 del artículo 531 del Código Judicial entonces como indica el citado artículo el juez hará una lacónica relación de lo aprobado y alegado, y resolverá en el acto lo que corresponda.

En este supuesto es necesario que la parte interesada manifieste mediante escrito de oposición, su disconformidad con el monto de la caución. Una vez presentado el escrito de oposición a la caución, la Oficina Judicial agendará audiencia ante el Juez de Garantía quien deberá decidir sobre la variación de la misma. La decisión que adopte el Juez de Garantía en esta

audiencia, también es susceptible de recurso de apelación en el efecto diferido.
(Artículo 571 del Código Judicial)

2 13 SOLICITUD DE SECUESTRO EN AUDIENCIA

Esta situación sucede si el querellante a pesar de conocer el trámite para solicitar el secuestro, lo hace en audiencia, presentando su escrito de secuestro ante el Juez de Garantías; éste se limitará a decidir sobre su admisibilidad y fijará el monto de la caución esta es una sugerencia hecha por el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá.

A partir de ese momento el querellante cuenta con el término de 30 días para consignar la caución, y su posterior admisión la decidirá el Juez de Garantías en turno, mediante resolución escrita.

Sugerencia hecha por el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá.

2 14 ADMISIÓN DE LA CAUCIÓN

Una vez consignada la caución ante el funcionario designado por la Oficina Judicial para tal efecto, se hará entrega de la documentación correspondiente al Juez de Garantías en turno, a fin de que se pronuncie en cuanto a la admisión de la caución ya consignada.

La caución será admitida cuando:

- a) Corresponda de forma íntegra y suficiente con el monto fijado por el Juez de Garantías.
- b) Cumpla con las formalidades establecidas para este tipo de caución.

En la misma resolución que admite la caución se ordenará o decretará el secuestro. En ella, además se deberán establecer las costas del proceso, para lo cual se tomará en cuenta la siguiente tabla de porcentajes:

Cuantía del Secuestro	Porcentaje	Costas
Hasta B/.20,000.00	20%	B/.5,000.00
Hasta B/.100,000.00	20%	B/.21,000.00
Hasta B/.500,000.00	15%	B/.81,000.00
Hasta B/.1,000,000.00	10%	B/.131,000.00
De B/.1,000,000.00 en adelante	Discrecional	Discrecional

Esta resolución es apelable en el efecto devolutivo (base jurídica Artículo 531 numeral 6, 1138 numeral 2 y 1139 numeral 3 del Código Judicial y Artículo 169 numeral 6 del Código Procesal Penal).

Estos porcentajes se basan en el Acuerdo No 49 de 24 de abril de 2001, por la cual se aprueba la Tarifa de Honorarios Profesionales Mínimo de los Abogados en la República de Panamá, basados en los porcentajes de los procesos ordinarios.

2 15 EFECTOS DEL SECUESTRO

El Código Civil en su artículo 337 define la propiedad, como el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas por la ley.

El Secuestro Civil en sede Penal tiene los mismos efectos de un Secuestro Civil ya que como indica el autor patrio Jorge Fábrega en su obra Instituciones de Derecho Procesal Civil lo define como:

“El secuestro implica la privación de la disponibilidad por parte del poseedor de la cosa de que se trate y su entrega en virtud de orden <<mandamiento>> del Juez al secuestre, a efecto de evitar la pérdida o desmejoramiento de dichas cosas en manos del demandado y (a pesar de que no lo expresa el Art. 533 del C.J., de terceros o actos de la naturaleza) al tratarse de inmuebles, evitar con su depósito o con la inscripción del auto que lo ordena en el registro público, que puedan ser objeto de disposición o gravamen en detrimento del actor o futuro actor.” (FABREGA P., Jorge. Instituciones de Derecho Procesal Civil, Tomo I, Segunda Edición, aumentada y corregida, Editora Jurídica Panameña, Panamá. 2004. p. 320.)

Por lo tanto se producen los siguientes efectos:

1. La indisponibilidad del bien por lo tanto el titular del bien no podrá ejercer ninguna de las acciones relativas a la enajenación del mismo ni, a la constitución de derechos reales.
2. La atribución a un tercero (depositario, administrador), de la función de custodiar el bien.
3. La sujeción al tribunal.

2 16 INVENTARIO Y AVALÚO DE BIENES MUEBLES

Si la petición del secuestro se refiere a bienes muebles, el Juez de Garantía en turno se trasladará al lugar donde se encuentren y se inventariarán, con el apoyo de un auxiliar designado por la Oficina Judicial.

Esto se hace ya que en el proceso penal no existe la figura del Alguacil Ejecutor, por tal motivo el Juez de Garantías debe realizar este inventario en base al artículo 535 y al numeral 5 del artículo 536 del Código Judicial.

El inventario consiste en la identificación del bien o los bienes objeto del secuestro, previo concepto de los peritos designados para tal efecto, por lo tanto el tribunal debe evaluarlos antes de hacer la entrega real de estos al depositario.

Por lo tanto al tratarse de bienes muebles y salvo ciertas excepciones como los salarios, créditos, cuentas bancarias, etc., es necesario la aprehensión del bien o bienes y el depósito judicial, para que se entienda constituidos el secuestro y produzca sus efectos, mediante la diligencia correspondiente por lo el secuestro es ineficaz si no se llegó a verificar la aprehensión del bien como ha señalado la Corte Suprema.

a) DESIGNACIÓN DE PERITOS:

Los peritos son designados libremente, uno (1) por el Juez de Garantías y otro por la parte que solicita el secuestro en base al artículo 535 del Código Judicial mencionado.

b) DESIGNACIÓN DE DEPOSITARIO:

El depositario, a quien se le hará entrega del bien o los bienes muebles objeto del secuestro, es designado por el Juez de Garantías.

El artículo 252 del Código Procesal Penal, en relación a vehículos de motor, naves o aeronaves, bienes muebles e inmuebles de propiedad de terceros no vinculados al hecho punible, señala que el Juez de Garantía podrá designar como depositarios a sus propietarios. Lo que podrá aplicarse por analogía cuando se trate de solicitudes de secuestro por parte del querellante.

En caso de que el propietario de los bienes muebles objeto del secuestro no sea un tercero sino el propio indiciado o imputado, la parte que solicita el secuestro deberá proponer en su solicitud a la persona que desea sea designada como depositario de los mismos.

Los depositarios en el secuestro civil en sede penal tienen las obligaciones generales de todo depositario conforme a lo dispuestos en los artículos 1463, 1480 y 1481 del Código Civil, en cuanto sean compatibles con su naturaleza. Por lo tanto, está obligado a cuidar el objeto encomendado con la diligencia de un padre de familia y a restituir la cosa depositada en base al artículo 1459 del Código Civil, una vez concluido el depósito.

2 17 AVALÚO

Cuando las cosas objeto de secuestro (bienes muebles e inmuebles) tengan valor catastral o establecido en el respectivo registro, no será necesario

practicar diligencias de avalúo para establecer su valor.

Tampoco es necesaria la diligencia de avalúo cuando el secuestro recaiga sobre dineros o bonos del Estado.

Sin embargo, cualquiera de las partes puede solicitar al Juez de Garantías y este así deberá disponerlo, que se practique avalúo real de la cosa objeto del secuestro, para establecer su valor y condición material teniendo como base legal el artículo 536 del Código Judicial que indica lo siguiente respecto a este tema “No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal, y éste así lo dispondrá, que se practique avalúo real de la cosa mandada a secuestrar para establecer su valor y condición material.”

2 18 EJECUCIÓN DEL SECUESTRO

Una vez admitida la caución y constituida la garantía ofrecida, el Juzgado de Garantías procederá a la ejecución del secuestro, sin la audiencia del demandado (indiciado, imputado o tercero civilmente responsable).

Sobre cómo se debe practicar un secuestro nuestra jurisprudencia en el fallo de la Corte Suprema de Justicia en Casación en la Acción de Secuestro dentro del Proceso Ordinario declarativo que BANCO DE SANTANDER (PANAMA), S.A. le sigue a YAKIMA INTERNACIONAL, S.A., LATIN AMERICAN SECURITIES, S.A. o VALORES LATINOAMERICANOS, S.A., INMOBILIARIA CENTRAL, S.A. y HERNAN A. BONILLA G., de 17 de octubre de 2003 indica lo siguiente:

“En este sentido, la doctrina ha desarrollado diversos aspectos concernientes a la reglas generales de las medidas cautelares, que se encuentran en los artículos 531 y 532 (antes 521 y 522) del Código Judicial, como son sus presupuestos procesales, procedimientos y efectos. Entre los presupuestos procesales se destacan: 1- la jurisdicción y competencia, respecto a lo cual se entiende que debe actuar el Juez competente para conocer el proceso principal, conforme lo establece el artículo 531, numeral 4 del Código Judicial; 2- la legitimación de las partes; y 3- su postulación (por conducto de apoderado judicial. En cuanto al punto del procedimiento se tiene dicho: "....

2. Procedimiento.

Veamos los distintos trámites procedimentales que han de seguirse desde la solicitud hasta el momento en que las medidas pueden ser alzadas:

A) Iniciación.

La tramitación empieza con solicitud de la parte, dirigida al Juez competente del proceso principal, sin necesidad de repartos (art.521.4). Se tiene presente dos circunstancias importantes en esta materia:

a) La necesidad de urgencia, de rapidez, por ello el que no sean necesarios repartos.

b) La conveniencia de que al interpretar, integrar y aplicar las normas legales que regulan las medidas cautelares, el Juez debe hacerlo bajo un criterio de sencillez en la tramitación. El Juez debe estar consciente de que cualquier defecto en la identificación, denominación y calificación de la medida cautelar, no es óbice para no acceder a la adopción de las mismas, siempre, naturalmente, que la intención sea clara.

En esa línea, que acabamos de exponer, el legislador no establece una estructura determinada de la

solicitud y sólo exige en ella la expresión de lo siguiente (art.521.3):

- a) Nombre de las partes reales o presuntivas.
 - b) La medida que se solicita
 - c) El objetivo del proceso principal a que haya de acceder.
 - d) La cuantía del proceso
- B) Documentación de las medidas.
- C) Orden consecutivo legal.

Existe un sistema de tracto sucesivo o acto continuado donde primero se presenta la solicitud, en la forma que hemos visto. El Juez a continuación debe calificar la concurrencia de los presupuestos de admisibilidad y, en caso de admitir la medida, fijar la caución. Una vez consignada ésta, procederá a decretar la medida y disponer su consiguiente ejecución. El Juez debe ser garante de que ese orden consecutivo se cumpla rigurosamente asegurando el cumplimiento de la garantía constitucional de la acción cautelar."

(Estudios de Derecho Judicial, "LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO CIVIL DE LA REPUBLICA DE PANAMA", Luis Carlos Reyes y Ricardo Sánchez Sánchez, Escuela Judicial, págs. 33, 36, 37)

En la obra previamente citada, también se alude específicamente a la medida cautelar de secuestro, enfatizando que ha de decretarlo el Juez competente para conocer del proceso principal y que el mismo debe atenerse, además de a lo regulado específicamente para esta materia, a las reglas generales establecidas en el artículo 531 (antes 521) del Código Judicial, entre lo que se incluye la verificación del cumplimiento de ciertos requisitos

dentro del escrito de solicitud. Veamos:

"SECUESTRO

4. Procedimiento

A) Petición de secuestro.

La petición de secuestro ha de contener:

a) Nombre de las partes.

b) Objetivo de la medida cautelar, es decir, pretensión que se pretende garantizar y que consta en demanda presentada o en demanda que se va a presentar.

c) La suma por la que se pide, que puede ser inferior al valor de la demanda.

d) Designación del perito evaluador (cuando sea necesario hacer valoración).

También puede contener, si el actor, lo considera conveniente, el nombre de la persona que desea que actúe como depositario, aunque ello, como hemos dicho, no obligue al Juez a designar a esa persona.

c) Descripción del bien o bienes a secuestrar.

En el caso de solicitarse el secuestro de un bien mueble deberá describirse de tal forma que sea totalmente identificable, señalando la marca y modelo (si existen), tamaño, color, etc.

Si se pide el secuestro de un bien inmueble, deberá hacerse constar el número de la finca, el tomo, folio y asiento correspondiente." (Ob.cit.pág.55)

Como podemos observar en este Secuestro Civil en sede penal se siguen varios de estos principios pero adaptados como lo son el Juez competente que

como ya se mencionó el artículo 268 del Código de Procedimiento Penal es el Juez de Garantías, la legitimación de las partes que como se ha mencionado para solicitarlo es la víctima, el apoderado judicial es el querellante debidamente constituido.

Sobre el procedimiento ya se ha mencionado como se debe dar la solicitud y la razón de urgencia o rapidez al decretarlo y que se pueda solicitar también en audiencia, constituye la sencillez en la tramitación, también hemos mencionado lo del tracto sucesivo o acto continuado en lo referente a los presupuestos de admisibilidad de la medida y los requisitos de la petición.

2 19 BIENES MUEBLES

Cuando se trata de bienes muebles, el secuestro se ejecuta con la entrega de las cosa al depositario designado por el Juzgado de Garantías. Previo inventario y avalúo de los mismos por parte de los peritos designados por el Juez y la parte solicitante.

Lo anterior responde a lo preceptuado en el artículo 535 del Código Judicial panameño, que hace referencia al secuestro de bienes muebles, donde cita: "...si la petición de secuestro se refiere a bienes muebles, el Juez o Alguacil Ejecutor se trasladará al lugar donde se encuentren y se inventariarán, identificándolos debidamente, oyendo el concepto de dos peritos designados libremente, uno por el Juez y otro por el peticionario que lo propusiera, y se entregarán al depositario que nombre el Tribunal...".

Con relación al secuestro de bienes muebles, los tratadistas sostienen que para que se entienda constituido el secuestro sobre bienes muebles, es necesario que se dé la aprehensión del bien y el depósito judicial del mismo; de forma tal que produzca efectos. (FÁBREGA P. Jorge-MEDIDAS CAUTELARES, Litho-Impresora Panamá, S.A., Panamá, 1984, pág.103)

Así lo confirma nuestro Código Judicial en su artículo 535.

Por lo tanto, de la lectura del artículo que antecede, queda claro que cuando se trate de un secuestro que tenga por objeto un bien mueble, el secuestro se entiende trabado cuando se produce la diligencia de inventario y avalúo, y el bien se entrega al depositario, es decir, cuando se constituye el depósito.

2 20 BIENES INMUEBLES O DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMUEBLES

En este caso el secuestro se entiende constituido cuando la orden judicial es anotada en el Diario de Registro Público.

Se debe comunicar al director del Registro Público la orden de secuestro, que impedirá la anotación de cualquier operación que haya verificado el demandado con posterioridad a la solicitud o que, al haberlo acordado, no la haya presentado al registro y resulta nula por mandato expreso de la ley, cualquier inscripción que se haga a pesar de tal prevención en base al numeral 1 del artículo 536 del Código Judicial.

Esta orden debe comunicar al funcionario registrador, lo siguiente:

- a) Orden de que se abstenga de registrar cualquier operación que haya verificado o verifique el demandado con posterioridad a la comunicación de secuestro;
- b) Que la Inscripción que se haga a pesar de tal prevención será nula.

Teniéndose como base legal el artículo 536 numeral 1 del Código Judicial y debe enviarse copia del Auto que la decreta según lo indicado en el artículo 1778 numeral 4 del Código Civil, es muy importante esta orden ya que tratándose del secuestro de bienes inmuebles, se puede prescindir de su depósito como lo indica el artículo 536 señalado así: “Cuando las cosas tengan valor catastral o establecido en el respectivo registro, no será necesario practicar diligencia de avalúo para establecer su valor”.

2 21 DERECHOS REALES INSCRITOS EN REGISTRO PÚBLICO QUE AFECTAN BIENES MUEBLES

El secuestro quedará constituido cuando la orden judicial es anotada en el Diario de Registro Público en base legal al artículo 536 numeral 1 del Código Judicial.

2 22 BIENES MUEBLES O DERECHOS REALES SOBRE BIENES

MUEBLES INSCRITOS EN ALGUNA OFICINA PÚBLICA, DISTINTA AL REGISTRO PÚBLICO

Se entiende constituido cuando la Orden judicial sea recibida en la oficina registradora correspondiente, la cual deberá extender acuse de recibido, indicando la fecha y hora de su recepción y la firma, nombre y título del servidor público que la recibe.

Es prudente aclarar que existe una diferencia entre el secuestro de bienes muebles y el secuestro sobre otros bienes o derechos susceptibles de esta medida. El procesalista Jorge Fábrega Ponce, en su obra Medidas Cautelares, expone:

"La Corte ha expresado <<no es lo mismo secuestrar un establecimiento que secuestrar todas las máquinas y útiles y la materia prima necesaria para que esos establecimientos puedan funcionar>> (HERERA, L.T. II, No. 708, pág. 143). Esto es, que el secuestro se puede decretar sobre bienes particulares de un establecimiento -que quedan substraídos al establecimiento- o sobre la universalidad jurídica, caso en el cual se designa un administrador a la empresa.

...

Cuando el custodio ejerce sus funciones sobre una universalidad de bienes, se habla más bien de depositario-administrador."

De la obra citada se pueden desglosar dos aspectos de relevancia. En primer lugar, la diferencia entre la aplicación de la medida cautelar sobre bienes de un establecimiento y la otra, sobre su administración y, como consecuencia de esta última, qué abarca el secuestro a la administración de un

establecimiento.

También ilustra sobre este tema la jurisprudencia patria mediante la Sala

Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia:

"Se observa en primer lugar, contrario a la interpretación extensiva que hace el Tribunal Superior, que la medida cautelar solicitada y decretada no recae sobre la administración de la empresa concesionaria sino que va dirigida a la abstención de actos que en términos generales hacen relación con su infraestructura. De aceptarse la tesis esgrimida por el Tribunal Superior en el sentido de que se trata de actos que son parte de la administración de la empresa por ser necesarios para la prestación del servicio, significaría pasar por alto la distinción que introduce en esta materia la propia ley cuando regula de manera distinta, tratándose del secuestro por ejemplo, que este pueda recaer sobre la administración de una empresa, sus bienes muebles o inmuebles. Es obvio que cualquier medida cautelar que recaiga sobre cualquiera de estos bienes, directa o indirectamente ha de repercutir, a final de cuentas, sobre las operaciones y administración de la empresa, pero jurídicamente y en la práctica, son medidas distintas, son bienes o valores distintos, y distintos son los requisitos que la ley exige para su procedencia, así como sus efectos, la responsabilidad de quienes intervienen para asegurar la efectividad de la medida, razón por la cual la ley distingue, por ejemplo, cuando se trata de la responsabilidad de los depositarios simplemente, de depositarios-administradores o secuestres, etc." (Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo Civil, Recurso de casación de BSC DE PANAMA, S. A. en la medida conservatoria o protección en general que propone contra TRICOM DE PANAMA, S.A., 4 de abril de 2003, Ponente: José A. Troyano.)

2 23 DINEROS, VALORES, CRÉDITOS, DERECHOS U OTROS BIENES

MUEBLES PERTENECIENTES AL DEMANDADO, PERO QUE ESTÁN EN POSESIÓN DE UN TERCERO

El secuestro se entiende constituido cuando la orden judicial es entregada al tercero, el cual queda de inmediato constituido en depositario judicial del bien o bienes respectivos, con las responsabilidades de la ley.

Cuando se trate de dinero, valores, títulos al portador o bonos del Estado, el Juez de Garantías ordenará que estos sean remitidos al Banco Nacional de Panamá, salvo que se encuentren depositados en otra entidad bancaria, en cuyo caso esta quedará constituida como depositaria.

En cualquier caso, el depositario (sea banco privado, el Banco Nacional o un tercero cuando no se trate de valores, dinero, títulos al portador o bonos del Estado) por virtud del secuestro que se ordena, contrae las obligaciones establecidas en el contrato de depósito (artículo 1459 y siguientes Código Civil.), las referentes al depósito judicial (artículos 1478-1481 del Código Civil), y aquellas generales al depósitos establecidas en el Título X del Código Civil que remiten a Título I del Libro Cuarto del mismo cuerpo legal.

En el caso específico de los bancos, y con respecto a los depósitos sujetos a secuestro, el depositante pierde la disponibilidad de dichos bienes precisamente por los efectos de esta medida cautelar.

Por lo que de hecho, el banco se constituye como el ente óptimo, idóneo y natural para ejercitar la actividad de depositario, puesto que precisamente el recibo de depósitos es el pilar de la actividad bancaria, (por cuya constitución

asume las obligaciones demandantes de la normativa antes señalada), encontrándose dichas instituciones regidas por un ente gubernamental creado especialmente para evitar manejos ajenos a la transparencia y efectividad profesional, (Superintendencia Bancaria) en atención a que, la confianza en este sector de la economía, es el motor que impulsa su desarrollo.

Debe señalarse que, al constituirse el depósito original (de manera voluntaria por parte del cuentahabiente) comienzan a regir como derecho positivo las normas contentivas en los estatutos o reglamentos de la institución, y en su defecto, por causa de vacíos legales, las normas referentes al depósito estatuidas en el Título XIV del Código de Comercio, en atención a lo que señala el artículo 838 del mismo cuerpo legal.

Sin embargo, al momento de constituirse el secuestro o depósito judicial se suspende la relación comercial por el monto del secuestro (salvo en lo que respecta al pago de intereses) o en lo concerniente al tipo de relación establecida en relación al bien objeto de esta medida (dentro de los contemplados en el numeral 4 del artículo 526 del Código Judicial), salvo que el contrato contemple la resolución del contrato, y se aplican las antes mencionadas normas generales de carácter civil referentes al depósito judicial y al depósito en general, y de manera supletoria las contempladas en el Código Judicial. (cfr. artículo 1481 del Código Civil).

2 24 SUELDOS O SALARIOS

En este caso en base al numeral 4 del artículo 526 del Código Judicial pero su tramitación es distinta a la forma en que se mencionó en el punto anterior.

En materia de secuestros o embargos de salarios y sueldos de los trabajadores particulares o del Estado, en nuestro ordenamiento jurídico se les ha concedido una protección especial por razón que constituyen el medio de sustento de la persona y el de su familia.

Por tal motivo la Constitución Política de Panamá establece en su artículo 61 que el mínimo de todo salario es inembargable así:

“Artículo 61.- A todo trabajador al servicio del Estado o de empresas públicas o privadas o de individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo mínimo...”

Son insecuestrables el sueldo o salario mínimo y la parte mínima del salario, salvo que se trate de reclamos de pensiones alimenticias, el ochenta y cinco por ciento del sueldo o salario fuera de los casos expresados, salvo que se trate de reclamos de pensiones alimenticias en base al artículo 564 y los numerales 1 y 2 del artículo 1650 del Código Judicial de esta forma:

“564. Son aplicables a los secuestros las prohibiciones y restricciones referentes a embargo.

1650. (1674) Salvo lo dispuesto en leyes especiales, podrán ser objeto de embargo todos los bienes enajenables del deudor con las siguientes excepciones:

1. El sueldo o salario mínimo y la parte mínima del salario, salvo que se trate de reclamo de pensiones alimenticias;
2. El ochenta y cinco por ciento (85%) del sueldo o

salario fuera de los casos expresados en el ordinal anterior, salvo que se trate de reclamos de pensiones alimenticias;
3...”

En estos casos el Juez le envía una nota (oficio) al empleador a efecto de que retenga la suma secuestrada, si se trata de un empleado público dependiendo que institución sea se puede enviar nota a Contraloría o si su planilla es independiente como por ejemplo la Caja de Seguro Social o la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), se envía la nota a esas instituciones.

También el Código de Trabajo en su artículo 715 contiene normas que son aplicables a trabajadores particulares:

“Artículo 715.-

En los procesos de trabajo podrán ser objeto de secuestro todos los bienes enajenables del demandado o presuntivo demandado, con las siguientes excepciones:

1. El salario mínimo.
2. El ochenta y cinco por ciento del excedente del salario mínimo.
- 3...”

El mismo artículo dice “Estas excepciones regirán también a favor del trabajador en cualquier proceso civil en que sea demandado.”

Cabe agregar que el Código de Trabajo impone al empleador el deber de abstenerse de darle cumplimiento a una orden que entrañe un desconocimiento

a las normas protectoras de los salarios de los trabajadores, sobre porcentajes máximos en la siguiente forma:

“Artículo 163.-

Ningún funcionario judicial podrá ordenar descuentos de los salarios de los trabajadores, por embargo o transacción, superiores al porcentaje máximo establecido en esta sección, y si lo hiciere, el empleador no estará obligado a cumplir la orden correspondiente, y comunicará de inmediato al tribunal la razón por la cual no puede practicar los descuentos.

En caso de infracción de esta norma, el funcionario judicial que a sabiendas de la ilegalidad del descuento, lo mantenga, incurrirá en causal de suspensión del cargo y, en caso de reincidencia, quedará obligado a la restitución de las sumas correspondientes.”

2 25 FACULTADES DEL JUEZ DE GARANTÍA EN LA EJECUCIÓN DEL SECUESTRO

El Juez, al momento de ejecutar el secuestro goza de las siguientes facultades: (Numeral 9 del artículo 531 del Código Judicial)

- a) Adoptar las decisiones que fueren necesarias
- b) Sancionar en el acto al que estorbare la ejecución de la medida.
- c) Emplear la fuerza pública si fuese necesario.

Así tenemos la regla que establece el numeral 9 del artículo 531 del Código Judicial, que a la letra dice:

"9. El juez goza de poderes adecuados para adoptar las decisiones que fueren necesarias, sancionar en el acto al que estorbare la ejecución de la medida, con

arreglo al artículo 1933 y empleará la fuerza pública si fuese necesario;".

Cabe mencionar que el artículo 1933 al que remite el artículo citado, regula las sanciones imponibles a las personas responsables de desacato o inobservancia de las decisiones adoptadas por los tribunales judiciales.

"1933. (1957) A la persona responsable de desacato, el juez le impondrá arresto por todo el tiempo de su omisión o renuencia a obedecer la orden judicial que motiva su rebeldía.

Para la imposición de la pena corporal, cuya duración en ningún caso podrá ser mayor de seis meses por una misma falta, se procederá así:

La persona contra la cual se dicte el apremio corporal será detenida por un término no mayor de un mes. Vencido ese período será puesta en libertad y si pasaren diez días de estar libre sin que presente la prueba de haber cumplido lo ordenado por el juez, será detenida nuevamente hasta por ocho meses y así sucesivamente hasta que se cumpla el año que puede durar el apremio en su totalidad.

El arresto cesará inmediatamente que el sancionado por desacato obedezca la orden cuyo incumplimiento da lugar a la imposición de la medida.

En caso de desacato, con arreglo a lo dispuesto en las disposiciones de este Título, el juez podrá, en lugar del apremio corporal, imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que se cumplan sus mandatos u órdenes, cuyo importe será a favor del litigante afectado por el incumplimiento.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste, si el afectado justifica parcial o totalmente la causa o causas de su renuencia o resistencia."

2 26 PRESENTACIÓN DE CAUCIÓN POR PARTE DEL INDICIADO,

IMPUTADO O TERCERO CIVILMENTE RESPONSABLE

La persona contra la cual se ha solicitado el secuestro puede presentar caución para que responda por el secuestro, o en su defecto podrá depositar la suma de dinero que cubra lo secuestrado y las costas que fije el Juez de Garantías.

En ese supuesto, el Juez de Garantías suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o levantará el ya verificado.

La resolución que ordene el levantamiento del secuestro es apelable por la parte contraria, pero esta impugnación no suspende el cumplimiento de la misma.

En base al artículo 546 del Código Judicial:

“546. Si el deudor presentare caución para que responda por el monto del secuestro o hiciere depósito en dinero por la suma que cubra lo secuestrado y las costas que fije el juez, se suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o se levantará el ya verificado.

Lo dispuesto no tendrá lugar cuando por medio de pretensión real se persigan inmuebles o muebles determinados y el secuestro se haya dirigido exclusivamente sobre tales bienes, ni tampoco cuando habiéndose secuestrado dinero efectivo o crédito o valores fijos, se pretenda presentar caución para levantar o suspender este secuestro.

Cuando el depósito a que se refiere el primer inciso de este artículo se hiciere en dinero, o en caución de compañías de seguros o bancos, autorizados para ello, la resolución que ordena el levantamiento del secuestro se cumplirá de plano, sin necesidad de previa notificación, salvo que la demanda verse sobre pretensión real, en cuyo caso se estará a lo que dispone el primer párrafo de este artículo.

La resolución que ordena el levantamiento es apelable

por la parte contraria, pero esta impugnación no suspende el cumplimiento de la misma.

En los demás casos en que la caución sea entre las previstas en el artículo 570, y el Tribunal accediera al levantamiento, el juez podrá darle cumplimiento inmediato a la resolución, si a su juicio con ello no afecta gravemente al secuestrante; pero si tuviera alguna duda, deberá notificarla primero a éste y esperar a que se resuelva el recurso, que interponga y que no quede ejecutoriada la resolución correspondiente.”

Como hemos visto mediante caución o cualquier otra garantía permitida por ley como el dinero, garantía hipotecaria, bonos del Estado o fianzas de compañías de seguros o bancarias se puede levantar el secuestro.

Del artículo 546 del Código Judicial se desprende el derecho que le asiste al sujeto pasivo de un secuestro para, presentando caución, evitar se practique la medida cautelar, o para levantar la ya verificada, de manera que lo consignado sirva de garantía para el demandante en el evento de una sentencia estimatoria en firme y ejecutoriada.

2 27 SUSPENSIÓN DEL SECUESTRO

Este punto se desprende del anterior ya que la suspensión del secuestro procede cuando, antes de la ejecución del mismo, la parte demandada presenta caución para que responda por el monto del secuestro.

En este caso, una vez presentado en la Oficina Judicial el Certificado de Depósito Judicial por el monto de la cuantía del secuestro u los otros medios mencionados en el punto anterior, conjuntamente con la solicitud de suspensión,

el Juez de Garantías procederá a decretarlo por escrito, mediante Resolución Motivada, en atención a lo estipulado en el artículo 546 del Código Judicial.

Sugerencia hecha por el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá en base al artículo 546 ya mencionado.

2 28 LEVANTAMIENTO DEL SECUESTRO

El levantamiento procede cuando, después de ejecutado el secuestro, el indiciado, imputado o el tercero civilmente responsable, presenta caución para que responda por el monto del secuestro.

En este caso, una vez presentado en la Oficina Judicial el Certificado de Depósito Judicial por el monto de la cuantía del secuestro, conjuntamente con la solicitud de levantamiento, se procederá a agendar audiencia oral ante el Juez de Garantías, quien deberá decidir en oralidad lo concerniente a esta solicitud. (Art. 494, numeral 3)

Sugerencia hecha por el borrador de manual hecho por los Jueces del Circuito de Panamá en base al artículo 546 ya mencionado.

2 29 DEPOSITARIO JUDICIAL

El depositario judicial es la persona designada por un juez o tribunal, o por los solicitantes de la medida de secuestro, reconocida, para tener, custodiar y conservar, bajo su responsabilidad, los bienes secuestrados mientras se

resuelve el conflicto penal.

El juez regulará prudencialmente los honorarios del depositario de acuerdo con la importancia de la función o la labor realizada. Para tal efecto, podrá consultar, si lo estima necesario, a un perito o realizar las averiguaciones que estime convenientes.

Por lo tanto la figura del depositario judicial no se ha instituido con la finalidad de que quien solicita el secuestro decida la suerte del manejo y bienes sujetos a esta medida, ya que, como anota el Doctor Jorge Fábrega en su obra *Medidas Cautelares*, "lo que quiere es evitar es que la cosa quede en manos de personas interesadas en el proceso, y si se permite (como ocurre) a quien pide un secuestro designar al depositario, lógico es que hará la designación al tener en cuenta el hecho de que la persona que escoja favorezca o no sus intereses." Siendo que en "el Código no existe disposición alguna que autorice dicha práctica, sino más bien norma expresa orientada en sentido contrario (art. 220 C. J.)" (Actual art. 221 C.J.) (cfr. Fojas 91-92).

2 30 SUPERVISIÓN DEL DEPOSITARIO JUDICIAL

El Juez de Garantía, que es el encargado de este tipo de medida, puede supervisar, en cualquier momento, las gestiones del depositario y adoptar provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar graves errores, abusos o malos manejos, que causen o puedan causar graves perjuicios.

Esta supervisión se efectuará en audiencia oral, con la participación del querellante, indiciado/imputado o tercero civilmente responsable (según el caso) y el depositario judicial, siempre que así lo solicite la parte interesada.

En este supuesto, el Juez de Garantías podrá ordenar la constitución de una caución por parte del depositario, señalándole un término de hasta QUINCE (15) DÍAS para consignarla. De no consignarse la caución exigida, se procederá inmediatamente a la remoción del depositario y a la designación de otro, en base al artículo 553 del Código Judicial.

“Artículo 553. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el juez podrá supervisar, en cualquier momento, las gestiones del depositario y adoptar provisionalmente las medidas que la prudencia aconseje para evitar graves errores, abusos o malos manejos, que causen o puedan causar graves perjuicios.

En este sentido, el juez discrecionalmente podrá ordenar la constitución de una caución por parte del depositario, señalándose un término para consignarla que no excederá de quince días hábiles. De no consignarse la caución exigida, se procederá inmediatamente a la remoción del depositario y la designación de otro por el tribunal.”

El Juez puede, en cualquier momento, decretar la remoción de un depositario en forma debidamente motivada, siempre que considere que la actuación de este no resulta ajustada a los fines del depósito o por pérdida de la confianza fundada en hechos objetivos.

La resolución que se dicte es de carácter irrecurrible y se cumplirá sin necesidad de notificación, en base al artículo 552 del Código Judicial.

“Artículo 552. Cualquiera de las partes puede pedir la separación del depositario probando ineptitud, malversación o abuso, en el desempeño del cargo. Esta petición se sustanciará y decidirá sumariamente. El juez para decidir oír al depositario. La resolución que se dicte se cumplirá sin necesidad de notificación, y será apelable por las partes y el depositario en el efecto devolutivo.

El juez discrecionalmente y mediante proveído de mero obedecimiento, podrá suspender provisionalmente al depositario durante la tramitación del procedimiento.

Si lo hacen de común acuerdo las partes, la separación del depositario se decretará de plano, aunque no se exprese causa alguna.

No obstante, el juez puede, en cualquier momento, decretar la remoción de un depositario en forma debidamente motivada, en todo caso en que se considere que la actuación de éste no resulte ajustada a los fines del depósito o por pérdida de la confianza fundada en hechos objetivos.

La resolución que se dicte es de carácter irrecurrible y se cumplirá sin necesidad de notificación.

En todo caso de suspensión o remoción de depositario, el juez deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1995 de este Código.”

En caso de remoción o suspensión del depositario, el Juez de Garantía deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 83 del Código Procesal Penal que señala lo siguiente:

“Tienen obligación de denunciar acerca de los delitos de acción pública que, en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de estas, lleguen a su conocimiento:

1) Los funcionarios públicos, en los hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones...”.

2 31 ACTA DE LA DILIGENCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL

Una vez verificado el depósito judicial en los casos que sean necesarios como lo son por ejemplo los bienes muebles o vehículos, se extenderá un Acta de la Diligencia, en la cual conste la entrega real de la cosa al depositario.

De esta diligencia se le entregarán copia al depositario y a las partes si así lo solicitan.

Así las cosas, la ley sustantiva y la procedimental incluyen igualmente disposiciones que atomizan las funciones del depositario puesto. En este sentido, el depositario puede ser removido por causa legítima o por consenso de los interesados, siendo indispensable que cumpla con las obligaciones de un buen padre de familia (cfr. artículos 1478 al 1481 del Código Civil).

“1478. El depósito judicial tiene lugar cuando se decreta el embargo o secuestro de bienes litigiosos, o de cualesquiera bienes para asegurar las resultas del juicio.

1479. El depositario de los bienes u objetos secuestrados no puede quedar libre de su encargo hasta que se termine la controversia que lo motivó; a no ser que el juez lo ordene por consentir en ello todos los interesados, o por otra causa legítima.

1480. El depositario de bienes secuestrados está obligado a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones de un buen padre de familia.

1481. En lo que no se hallare dispuesto en este Código, el secuestro judicial se regirá por las disposiciones del Código Judicial.”

Sobre este tema diversos autores indican lo siguiente: “BUEN PADRE DE FAMILIA. Es el modelo de conducta de la persona sensata y corriente, de diligencia normal, estándar o regla de conducta que una sociedad normal espera

de un hombre razonable”, y además, el depositario, puede ser suspendido discrecionalmente por el Juez a través de proveído de mero obedecimiento, o inclusive, puede ser removido judicialmente:

1. A petición de parte por ineptitud, malversación o abuso. Esta resolución es apelable por las partes y el depositario.

2. Por acuerdo de las partes, sin necesidad de que medie causal.

3. De oficio y de manera irrecurrible por parte del Juez, si se estima que la actuación del depositario no está ajustada a los fines del depósito, o por pérdida de la confianza fundada en hechos objetivos en base al artículo 552 del Código Judicial.

Puede igualmente el Juez tomar medidas para efectos de evitar graves errores, abusos o malos manejos que causen o puedan causar graves perjuicios, aunado a que tiene la facultad de exigir al depositario que constituya caución dentro del término fatal de 15 días, o de lo contrario será sustituido por otro que sea designado por el tribunal de conocimiento., como ya se mencionó anteriormente en base al artículo 552 del Código Judicial.

Así las cosas, en relación a las normas pertinentes al secuestro, se observa que, dado que la misma ley procedimental contempla medios de defensas a favor de quien solicita el depósito, (medidas éstas que pueden ser tomadas por el juez de manera unilateral pero motivada, pero en aras de la mayor protección del bien secuestrado), causales para que el depositario sea removido, e inclusive recursos contra esta decisión (en caso de que el fallo no

sea positivo); así como establece que en caso de remoción o suspensión del depositario, el Juez del negocio deberá poner en conocimiento a las autoridades competentes con respecto a las irregularidades que encontrara en la custodia de los bienes secuestrados, que por prudencia ameritaron la remoción o suspensión del depositario. Lo anterior bajo el mecanismo de la denuncia, según lo estatuido en los artículos 552 y 553 del Código Judicial.

2 32 OPOSICIONES E IMPUGNACIONES INCIDENTALES

El numeral 8 del artículo 531 del Código Judicial señala que las oposiciones y las impugnaciones incidentales se surtirán en oralidad, en dos momentos a saber:

a) En la Ejecución del Secuestro, cuando se esté efectuando la diligencia de depósito judicial; caso en el cual el Juez deberá resolver las oposiciones o impugnaciones en ese mismo instante.

b) Posteriormente en el Tribunal, luego de haberse practicado la diligencia de depósito judicial, caso en el cual se decidirán en audiencia oral.

Estas oposiciones e impugnaciones incidentales se resolverán sin formalidades especiales y sin suspender ni interrumpir la adopción o ejecución de la medida.

Las partes pueden presentar sus pruebas y alegaciones sumarias, procurando siempre la mayor celeridad posible.

El Juez de Garantías debe resolver en el acto lo que corresponda.

Asimismo, el artículo 494 del Código Judicial señala que se deciden en audiencia oral, y señala casos concretos así.

“Artículo 494. Se decidirán en audiencia los siguientes casos:

1. La solicitud de exclusión de bienes del secuestro por depósito de cosa ajena, a la que se refiere el artículo 555;
2. La solicitud de rescisión del secuestro según el artículo 560;
3. La solicitud de levantamiento del secuestro cuando, a juicio del juez, pudiera afectarse gravemente al secuestrante, como lo dispone el artículo 546;
4. La solicitud de separación del depositario, que contempla el artículo 552;
5. Las incidencias acontecidas con motivo de la ejecución o de la aplicación de una medida cautelar, cuando la ley lo exija o el juez estime conveniente la comparecencia de todos los interesados, conforme a los artículos 537, 559 y 562;
6. Las reclamaciones al hacer el depósito en caso de embargo que regulan los artículos 1677, 1678 y 1679; y
7. La solicitud de rescisión de embargo consagrada en el artículo 1681.

En estos casos, la resolución que ordene el traslado contendrá el apercibimiento de que se celebrará una audiencia el tercer día, una vez vencido dicho término. La audiencia podrá celebrarse aun en día inhábil, si el juez lo considera de urgencia, y se desarrollará permitiendo a las partes presentar sus alegaciones sumarias, procurando siempre la mayor celeridad posible. El juez hará una lacónica relación de lo probado, de lo alegado y resolverá en el acto lo que corresponda.

La hora de celebración de la audiencia y la escogencia de día inhábil si fuere el caso, las fijará el tribunal mediante proveído de mero obedecimiento que se notificará por medio de edicto, el cual permanecerá fijado por veinticuatro horas.

Esta audiencia se efectuará el día y hora señalados con las partes que concurran. De no asistir una de las partes, la audiencia se verificará y el juez dictará su fallo, imponiendo las sanciones correspondientes, y notificará a los ausentes por medio de edicto.

No habrá señalamiento de nueva fecha de audiencia, salvo el cierre del despacho por causa debidamente justificada. En estos casos, la fijación de la nueva fecha para la audiencia se hará con la celeridad y el apremio necesarios.

Este trámite se aplicará únicamente en aquellos casos en que la medida cautelar ya se hubiere practicado.

El trámite aquí previsto será aplicable a los incidentes de previo y especial pronunciamiento, regulados en el artículo 694 de este Código.”

Procederemos a ver algunos de estos casos.

2 33 SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE BIENES

El artículo 555 del Código Judicial señala:

“Artículo 555. Si al darse al registrador la orden de que trata el artículo 535 informare que el inmueble denunciado como de propiedad del demandado o presunto demandado está inscrito a nombre de otro o que haya sido secuestrado por otro tribunal, se revocará el secuestro decretado.

En estos casos, y cuando fuere depositada cosa ajena, el interesado podrá reclamarla mediante incidente, siguiéndose, en cuanto fueren aplicables, las reglas establecidas para las tercerías de dominio en los procesos ejecutivos; pero la apelación se concederá en el efecto devolutivo.”

De lo anterior se entiende que el Incidente de Exclusión de Bienes puede presentarse por la parte interesada en los siguientes supuestos:

- a) Cuando se decreta el secuestro sobre un bien susceptible de registro, que no es propiedad de la persona indiciada, imputada o tercero civilmente responsable en el hecho delictivo que dio origen a la medida.
- b) Cuando la cosa dada en depósito judicial es ajena, es decir, no es propiedad de la persona indiciada, imputada o tercero civilmente responsable del hecho delictivo que dio origen a la medida.

Sobre este tema el procesalista JORGE FÁBREGA PONCE expresa lo siguiente: "es de la esencia del secuestro el que los bienes que le sirven de objeto sean de propiedad del demandado o presunto demandado. Si el secuestro ha recaído sobre bienes que no son de su propiedad, el titular de éstos puede, mediante un incidente, exigir que se levante el mismo". (FÁBREGA PONCE, Jorge, "Medidas Cautelares", Editorial Gustavo Ibañez, Santa Fé de Bogotá, 1998, pág.172.)

Este incidente se tramitaría como una "tercería excluyente" y se resolverá en audiencia oral ante el Juez de Garantías.

Para que se decreta la exclusión del bien objeto del incidente, la parte interesada debe acreditar lo siguiente:

- a) Que el bien es de su propiedad
- b) Que su persona no se encuentra vinculada al proceso penal que da origen a la medida; es decir, que no es el indiciado, imputado o tercero civilmente responsable.

La decisión adoptada en esta audiencia es susceptible del recurso de

apelación en el efecto devolutivo.

2 34 SOLICITUD DE RESCISIÓN DEL SECUESTRO

El artículo 560 del Código Judicial señala lo siguiente:

“Se rescindirá el depósito judicial de una cosa, con la sola audiencia del secuestrante, en los siguientes casos:

1. Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de la diligencia de un depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito;...

2. Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta una copia auténtica de un auto de embargo de los bienes depositados, dictado en proceso ejecutivo hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro;...”.

Esta solicitud como lo señala el numeral 2 del artículo 494 del Código Judicial, debe decidirse en audiencia oral.

En ese sentido, la parte solicitante presentará en audiencia la documentación que respalde su solicitud, la cual se le dará traslado al querellante, a fin de que alegue lo pertinente, tomando en consideración los principios que rigen el Sistema Penal Acusatorio panameño.

Una vez escuchadas las partes, el Juez de Garantías procederá a resolver la solicitud.

Únicamente se decretará la rescisión del secuestro, cuando la parte solicitante acredite uno de los dos supuestos enunciados en el artículo 560 del Código Judicial o sea:

1. Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de la diligencia de un depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo juez y su secretario, con expresión de la fecha en que conste que el depósito a que la diligencia se refiere existe aún. Sin este requisito no producirá efecto la expresada copia;

2. Si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia auténtica de un auto de embargo de los bienes depositados, dictado en proceso ejecutivo hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo juez y su secretario, con expresión de la fecha de inscripción de la hipoteca en que se basa el proceso ejecutivo, la fecha del auto de embargo y que dicho embargo esté vigente. Sin este requisito no producirá efecto la copia. El tribunal que rescinda el depósito pondrá los bienes a disposición del tribunal donde se tramita el proceso hipotecario, de manera que éste pueda verificar el depósito en virtud del auto de embargo.

En estos casos el interesado formulará el pedimento mediante escrito al que deberá acompañar las pruebas mencionadas y el tribunal lo pasará en traslado al secuestrante, por un término de tres días. A su contestación éste podrá acompañar la prueba documental de que disponga y cumplido este trámite el tribunal lo resolverá.

La decisión adoptada por el Juez de Garantías es apelable en el efecto

devolutivo.

2 35 SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DEL SECUESTRO

El artículo 546 del Código Judicial señala:

“Artículo 546. Si el deudor presentare caución para que responda por el monto del secuestro o hiciere depósito en dinero por la suma que cubra lo secuestrado y las costas que fije el juez, se suspenderá el secuestro que vaya a verificarse o se levantará el ya verificado. Lo dispuesto no tendrá lugar cuando por medio de pretensión real se persigan inmuebles o muebles determinados y el secuestro se haya dirigido exclusivamente sobre tales bienes, ni tampoco cuando habiéndose secuestrado dinero efectivo o crédito o valores fijos, se pretenda presentar caución para levantar o suspender este secuestro.

Cuando el depósito a que se refiere el primer inciso de este artículo se hiciere en dinero, o en caución de compañías de seguro o bancos, autorizados para ello, la resolución que ordena el levantamiento del secuestro se cumplirá de plano, sin necesidad de previa notificación, salvo que la demanda verse sobre pretensión real, en cuyo caso se estará a lo que dispone el primer párrafo de este artículo.

La resolución que ordena el levantamiento es apelable por la parte contraria, pero esta impugnación no suspende el cumplimiento de la misma.

En los demás casos en que la caución sea entre las previstas en el artículo 570, y el tribunal accediera al levantamiento, el juez podrá darle cumplimiento inmediato a la resolución, si a su juicio con ello no afecta gravemente al secuestrante; pero si tuviera alguna duda, deberá notificarla primero a éste y esperar a que se resuelva el recurso, que interponga y que no quede ejecutoriada la resolución correspondiente.”.

La solicitud será decidida en audiencia oral por el Juez de Garantías, a petición de la parte interesada (indiciado, imputado o tercero civilmente responsable); solo en caso de que el secuestro haya sido verificado y se trate de

una solicitud de levantamiento de la medida por consignación de caución.

En este caso, el Juez de Garantías accederá a la solicitud de levantamiento del secuestro, siempre y cuando el monto consignado corresponda a la cuantía del secuestro o al valor de la cosa secuestrada.

No se podrá decretar el levantamiento del secuestro, aunque medie caución suficiente cuando:

- a) Se trate de una pretensión punitiva que guarda relación exclusiva sobre los bienes objeto del secuestro.
- b) El secuestro versa sobre dinero efectivo, crédito o valores fijos

2 36 ¿EN QUÉ OTROS SUPUESTOS SE PUEDE DECRETAR EL LEVANTAMIENTO DE UN SECUESTRO CIVIL EN UN PROCESO PENAL?

En los procesos penales, el secuestro civil será levantado por el Juez de Garantías en los siguientes casos:

- a) Cuando el indiciado, imputado o el tercero civilmente responsable, presente caución para que responda por el monto del secuestro.
- b) Cuando luego de formulada la imputación, las partes concurren ante el Juez de Garantías para validar un “Acuerdo de Mediación” donde le pongan fin al conflicto penal y acuerden el levantamiento del secuestro.
- c) Cuando el Ministerio Público solicite el Sobreseimiento y el Juez de Garantías así lo decrete en audiencia en base al artículo 357 del Código Procesal Penal.

d) Cuando el Ministerio Público haga uso del “Criterio de Oportunidad” antes de formular Imputación.

La resolución que ordena el levantamiento es apelable por la parte contraria, pero esta impugnación no suspende el cumplimiento de la misma.

2 37 SOLICITUD DE SEPARACIÓN DEL DEPOSITARIO

El artículo 552 del Código Judicial señala que cualquiera de las partes puede pedir al Juez que separe al Depositario Judicial de su cargo, siempre y cuando compruebe la “ineptitud, malversación o abuso” en el desempeño de su cargo.

Esta petición se sustanciará en audiencia oral ante el Juez de Garantías quién además de escuchar a las partes, deberá oír al depositario judicial.

Si ambas partes (querellante e indiciado/imputado/tercero civilmente responsable) de común acuerdo solicitan la separación del depositario, el Juez de Garantías deberá decretarla de plano, sin necesidad de expresar en su motivación, la causa de su decisión.

Sin embargo, si solo una de las partes es la que solicita la separación del Depositario y el Juez de Garantía considera que existen motivos suficientes para decretar la separación de mismo, así lo decretará en la audiencia oral, mediante decisión motivada. La decisión adoptada por el Juez de Garantías es susceptible de recurso de apelación en el efecto devolutivo.

2 38 LAS INCIDENCIAS ACONTECIDAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL SECUESTRO

Otra de las incidencias u objeciones que deben ser resueltas en audiencia oral por el Juez de Garantías, es la acontecida cuando la parte interesada, alegue con pruebas suficientes, que la caución ya constituida no representa el valor real de la cosa que garantiza.

En este supuesto, la parte interesada presentará prueba suficiente que acredite el valor real del bien, y en caso de que le asista la razón, el Juez de Garantías ordenará a la parte querellante que sustituya o constituya una caución adicional que represente el valor real a garantizar. Esta resolución es apelable en el efecto diferido.

2 39 DEVOLUCIÓN DE LA CAUCIÓN

Una vez finalizado el proceso penal, la caución consignada para garantizar los daños y perjuicios del secuestro civil podrá ser devuelta al Querellante en los siguientes casos:

- a) Si en la Sentencia de Sobreseimiento dictada por el Juez de Garantías, este expresa que el querellante actuó de buena fe.
- b) Si el imputado o tercero civilmente responsable no reclamase la caución dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la decisión, que pone fin al proceso penal.
- c) Cuando el conflicto penal se termina por Acuerdo de Mediación, la

caución se devolverá o entregará a quien o quienes las partes hayan convenido.

2 40 LA PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE PUEDE SOLICITAR LA FIANZA COMO PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Sobre este punto debemos señalar lo que nos indica el artículo 547 del Código Judicial que a letra indica:

“Artículo 547. Si la resolución ejecutoriada negare la pretensión del demandante, habiendo mediado secuestro u otra medida cautelar, se devolverá la caución prestada para garantizar los perjuicios, si en el fallo se expresase que el demandante actuó de buena fe, salvo en lo que se refiere al pago de las costas y expensas del proceso. Si no mediere la declaración a que se refiere el párrafo anterior, la caución sólo se liberará y devolverá si el demandado absuelto no formulase reclamación para indemnización de daños y perjuicios dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la resolución en que resultó absuelto. Si el demandado absuelto presentase la reclamación a que se refiere el párrafo anterior, no necesitará dar caución para asegurar la retención de la garantía retenida a su favor.”

En el citado artículo 547 del Código Judicial establece la posibilidad para el demandado, contra el cual se hubiere practicado secuestro, de reclamar la caución prestada para garantizar los daños y perjuicios, siempre que en el proceso resultare absuelto y que la parte demandante hubiese actuado de mala fe. Para el ejercicio de la reclamación indicada cuenta la parte interesada con tres meses, contados a partir de la ejecutoria de la resolución en que quedó

absuelto el demandado, en la esfera penal la parte que es declarada inocente y se le secuestraron bienes tiene los mismos tres meses para reclamar la caución prestada para garantizar los daños y perjuicios ya que por una razón se llama caución para garantizar los daños y perjuicios.

CAPITULO TERCERO

MARCO METODOLOGICO

3 1 DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

La investigación propuesta se centrara en el estudio del análisis de la figura del Secuestro civil en sede penal que se desarrollan en el Primer Distrito Judicial específicamente en la provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la Provincia de Colón.

Se tomaran en cuenta para esta investigación el conocimiento de esta figura de los Jueces de Garantías de las sedes mencionadas.

3 2 TIPO DE ESTUDIO

El trabajo de investigación corresponde a la rama de las ciencias sociales con enfoque mixto basada en cortes metodológicos cimentados en principios leales como la asociación y la relación entre variables cuyos resultados se obtienen a través de una muestra para hacer inferencia en una población.

La misma cuenta con un método inductivo - deductivo de campo ya que la investigación o recopilación de datos se hará por medio de la observación y la utilización de encuestas para así poder estudiar el conocimiento de esta figura en las provincias mencionadas.

Con fundamento en el análisis realizado del problema la investigación es descriptiva porque procura la descripción de un fenómeno que se suscita en determinado lugar. También contendrá un corte tipo exploratorio ya que exploraremos o examinaremos un tema poco estudiado o abordado en nuestra región y legislación panameña.

El estudio de tipo descriptivo-analítico permitirá recopilar la mayor

información mediante revisión de escritos de diferentes autores como la Ley 63 de 28 de agosto de 2008 que aprobó el Nuevo Código Procesal Penal que implementa el Sistema Acusatorio literatura sobre el tema doctrinas jurisprudencias, revistas entre otros. La información sera analizada de forma separada y en conjunto.

La metodología seleccionada permitirá el análisis de todas las fuentes o situaciones que han llevado a implementar esta figura en el sistema de procedimiento penal.

Lo trascendental de la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y la descripción detallada de los aportes categorías o clases de dicho objeto.

3 3 SISTEMA DE VARIABLES

Las variables son de gran utilidad para el desarrollo del trabajo de investigación ya que de ellas se obtiene información que responde a cuestionamientos relacionados con el problema.

Adquieren valor para la investigación que se vaya a realizar ya que nos otorgan respuestas que nos permiten detallar o responder a las diferentes alternativas que se desean y es que las mismas pueden determinar precisamente el efecto o causa y son propensas a realizar una medición.

El estudio se compone de dos (2) tipos de variables.

3 3 1 VARIABLE INDEPENDIENTE

El Secuestro Civil en sede penal en el Código Procesal Penal vigente.

3 3 1 1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL

El secuestro civil en sede penal es una medida de carácter procesal dictada por un juez o tribunal de justicia, en el caso de Panamá por un Juez de Garantías, que tiene por objeto sustraer del dominio de los imputados o personas civilmente responsables de un bien o bienes muebles, inmuebles o de cualquier tipo para poder asegurar los daños civiles ocasionados por un delito.

3 3 1 2 DEFINICION OPERACIONAL

Tiene como función la reparación de las víctimas del delito en la parte material.

3 3 1 3 DEFINICION INSTRUMENTAL

Para verificar el conocimiento de la figura y de la aplicación de la misma se realizaran encuestas las cuales se analizaran para con la información obtenida medir las variables de nuestra hipótesis

3 3 1 4 INDICADORES

Es de utilidad pública y de interés para las víctimas del delito.

3 3 2 VARIABLE DEPENDIENTE

El efectivo funcionamiento de la figura dentro del sistema de justicia.

3 3 2 1 DEFINICION CONCEPTUAL

Es la capacidad o facultad para lograr un efecto o fin deseado esperado o anhelado que se han definido previamente y para el cual se han desplegado acciones estratégicas para llegar al fin o efecto deseado.

3 3 2 2 DEFINICIÓN OPERACIONAL

Pretende conocer el resultado alcanzado por la aplicación de la figura del Secuestro Civil en sede penal en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

3 3 2 3 DEFINICIÓN INSTRUMENTAL

Revisaremos si la figura del Secuestro Civil en sede penal es frecuentemente utilizada durante la vigencia del Sistema Penal Acusatorio en las provincias de Panamá y Colón.

3 3 2 4 INDICADORES DE LA FIGURA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL

El procedimiento para la aplicación de esta figura.

3 4 FUENTES DE INFORMACIÓN

Las fuentes de información constituyen las herramientas fundamentales de toda investigación ya que permiten sentar las bases para el desarrollo de un estudio en particular

La utilización de informaciones veraces y actualizadas permite una interpretación jurídica con un debido rigor científico para lo cual se hará uso de diversas fuentes que permiten la recolección de datos.

3 4 1 FUENTES PRIMARIAS

Las fuentes primarias que se utilizan en esta investigación son el producto de consultas a libros el Código Procesal Penal, Código Penal, Código Judicial, Código Civil, revistas jurídicas leyes diccionarios convenios y tratados internacionales y jurisprudencias.

También se tomaran en cuenta tesis, monografías, ponencias de conferencias de temas actualizados sobre el tema de la tesis, consultamos la red de Internet jurisprudencia de los tribunales de justicia nacionales y extranjeros.

3 4 2 FUENTES SECUNDARIAS

Se hará uso de fuentes humanas y entrevistas realizadas a profesionales versados en la materia centrándonos en los que deben aplicar esta figura o sea en los Jueces de Garantías.

3 5 POBLACIÓN Y MUESTRA

3 5 1 POBLACIÓN

Son las personas o entes naturales que por sus características propias o sociales se seleccionan como grupo para la investigación.

Nuestra población comprende los Jueces de Garantías de las provincias de Panamá y Colón.

3 5 2 MUESTRA

En cuanto a la muestra se utilizara un grupo selecto de treinta y tres (33) Jueces de Garantías de las provincias de Panamá y Colón. La muestra es representativa por lo que nos ofrecerá una perspectiva general del problema planteado

Para la investigación la muestra es la siguiente

- Seis (6) Jueces de Garantías de la provincia de Colón.
- Siete (7) Jueces de Garantías de la sede de San Miguelito
- Veinte (20) Jueces de Garantías de la sede de Panamá.

3 5 2 1 TIPO DE MUESTRA

La muestra empleada es no probalística de tipo intencional puesto que se han seleccionado sujetos que pueden facilitar la información o sea que tienen conocimiento del tema que se investiga

3 6 MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

Las técnicas que se pretenden utilizar en la investigación son la observación simple que brindara datos generales sobre esta figura con características particulares y el cuestionario.

La observación simple brindara datos generales sobre la figura su situación legal y características. Por otro lado el cuestionario con preguntas cerradas dirigidas a los participantes por escrito y que facilitara el conocimiento que tengan de la figura y la frecuencia de su aplicación.

Dentro del modelo estadístico se cotejaran los datos utilizando el método descriptivo para determinar las medidas y promedio.

Los instrumentos idóneos para la recolección de la información estarán clasificados en análisis de fuentes primarias que corresponden a libros, revistas, folletos, códigos, artículos jurisprudencia nacional y extranjera archivos, doctrinas y la propia ley penal que implementa el Sistema Penal Acusatorio en Panamá.

3 7 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA

Se utilizaran instrumentos como la encuesta a Jueces de Garantías. Igualmente se complementara con el análisis de documentos diccionario obras jurídicas, códigos leyes publicaciones de revistas jurídicas, tesis, monografías, registros judiciales, y red de internet.

3 8 CONSIDERACIONES ÉTICAS

En el desarrollo de esta investigación se cumplirá con los principios éticos como el respeto a la participación voluntaria de la población de estudio la confidencialidad de la información obtenida y el anonimato.

CAPÍTULO CUARTO
ANÁLISIS DE RESULTADO

4.1 ANÁLISIS DE DATOS

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos mediante encuesta que se efectuó a los profesionales del derecho divididos de la siguiente forma seis (6) jueces de garantías de la provincia de Colón, siete (7) jueces de garantías de la sede de San Miguelito y veinte (20) jueces de garantías de la sede de Panamá, haciendo un total de treinta y tres (33) personas que laboran en las provincias de Panamá y Colón como funcionarios judiciales específicamente Jueces de Garantías.

Con estos resultados que se obtuvieron se elaborarán los cuadros estadísticos y gráficos que ayudan a tener una idea más precisa y clara del tema para poder comprobar o desechar la hipótesis que se formulara al inicio de la investigación.

Se procederá entonces a primero presentar la distribución del trabajo según las sedes donde se realizaron las encuestas y luego se procederá con las respuestas de las preguntas realizadas con todas las respuestas en general o sea con las veinte (20) preguntas de la encuestas.

Cuadro N°1

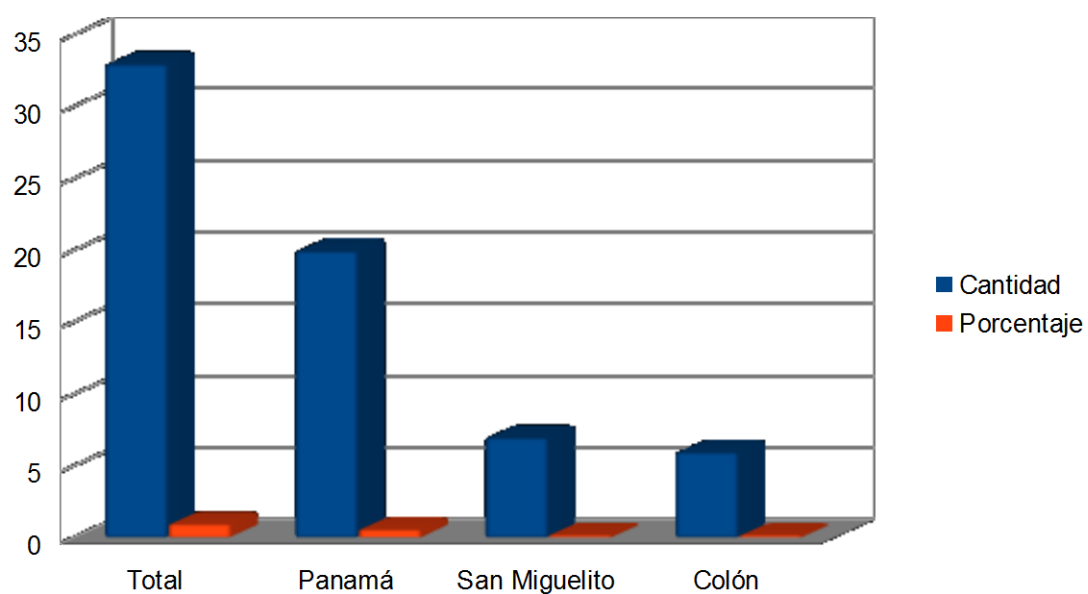
Distribución de personas encuestadas según la sede de trabajo.

Personas	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Panamá	20	61%
San Miguelito	7	21%
Colón	6	18%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N°1

Distribución de personas encuestadas según la sede de trabajo



FUENTE: CUADRO N° 1.

Análisis de cuadro y gráfica N° 1

Distribución de personas encuestadas según la sede de trabajo

El cuadro N° 1 y su respectiva gráfica demuestran la distribución de personas encuestadas según las sedes donde labora siendo así se entrevistaron a treinta y tres (33) Jueces de Garantías siendo el 100% de la muestra, veinte (20) en la sede de Panamá siendo el 61%, siete (7) en la sede de San Miguelito siendo el 21% y seis (6) en la sede de Colón siendo el 18% de la población sujeto a estudio.

4 2 RESULTADO DE ENCUESTA

Cuadro N°2

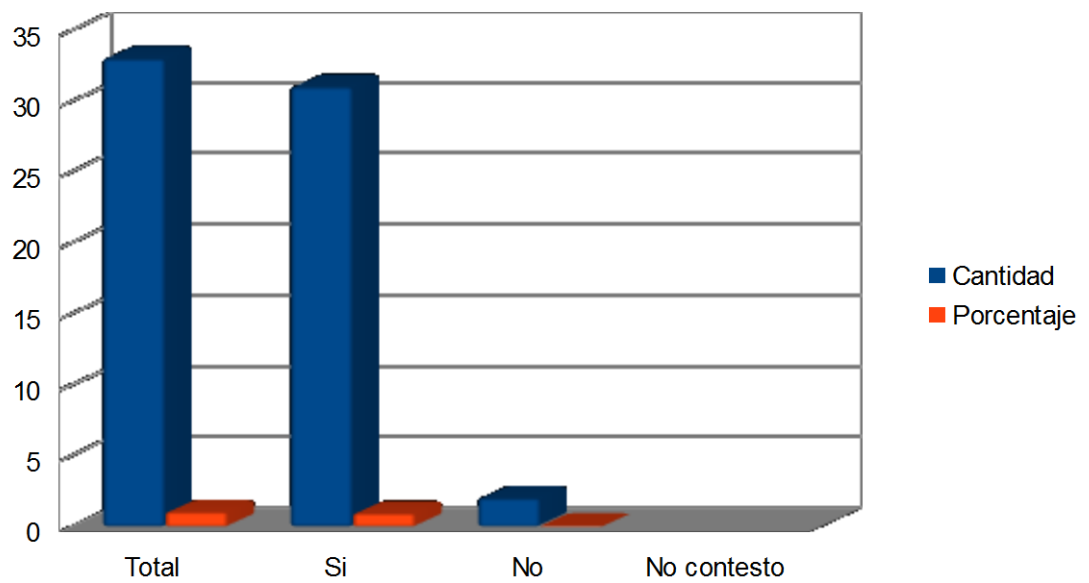
1- ¿SABE USTED SI EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PUEDEN PRESENTARSE SECUESTRO CIVIL DE BIENES, PARA ASEGURAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN DELITO?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	31	94%
No	2	6%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 2

1- ¿SABE USTED SI EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PUEDEN PRESENTARSE SECUESTRO CIVIL DE BIENES, PARA ASEGURAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN DELITO?



FUENTE: CUADRO N° 2.

Análisis de cuadro y gráfica N° 2

1- ¿SABE USTED SI EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO, PUEDEN PRESENTARSE SECUESTRO CIVIL DE BIENES, PARA ASEGURAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UN DELITO?

A la pregunta N°1 el 94% de los encuestados respondió afirmativamente. Lo anterior explica que la mayoría de los encuestados tienen conocimiento sobre la figura del Secuestro Civil en sede penal.

Cuadro N° 3

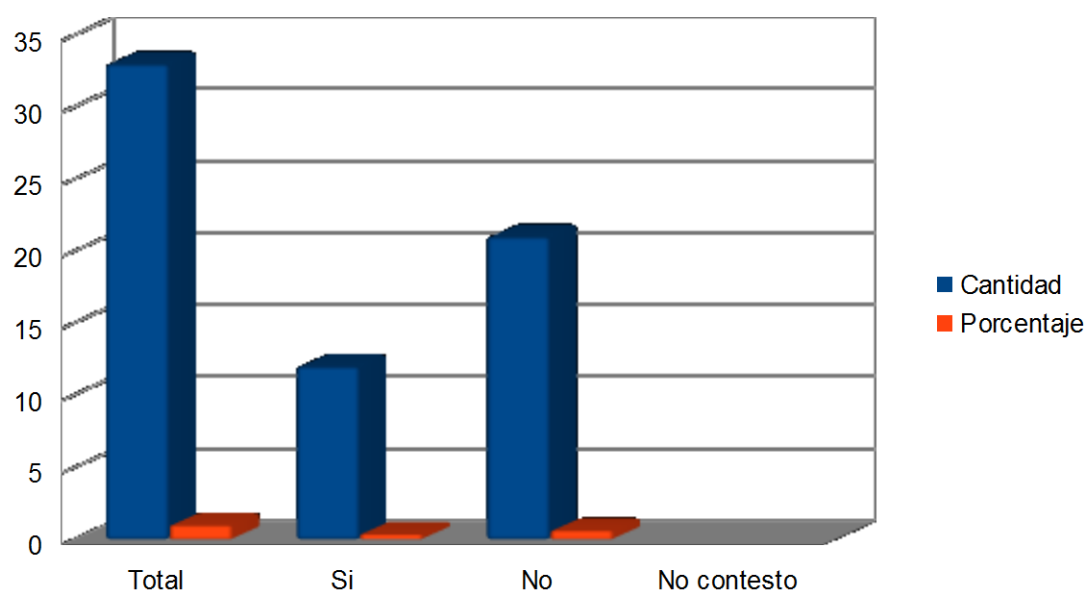
2-¿HA RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	12	36%
No	21	64%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 3

2-¿HA RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?



FUENTE: CUADRO N° 3.

Análisis de cuadro y gráfica N° 3

2-¿HA RECIBIDO ALGUNA VEZ UNA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?

En cuanto a la pregunta N° 2, sobre esta pregunta el 64% respondió negativamente lo que indica que la mayoría de los Jueces de Garantía de las provincias de Panamá y Colón no han recibido peticiones sobre esta figura y solamente el 36% tiene experiencia en la práctica con ella.

Cuadro N° 4

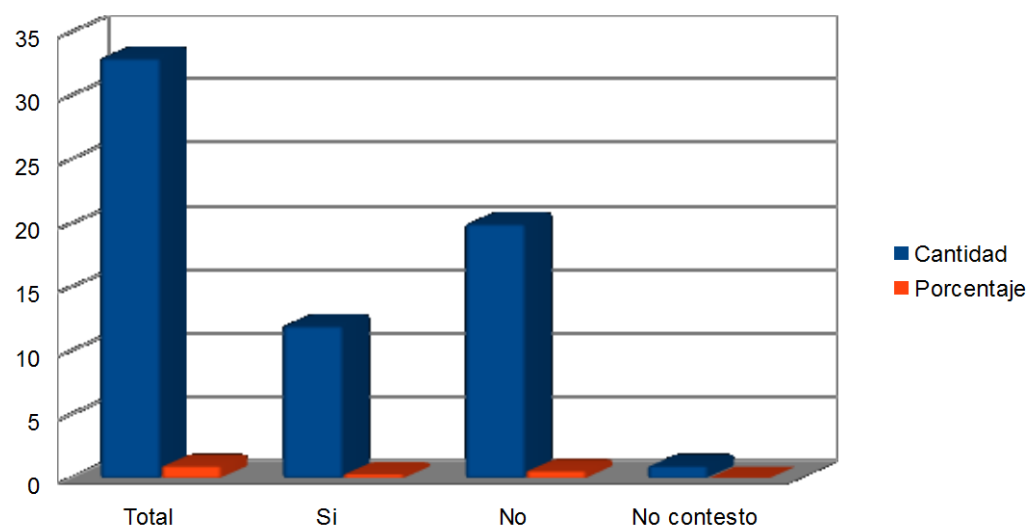
3- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE ORALMENTE?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	12	36%
No	20	61%
No contestó	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 4

3- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE ORALMENTE?



FUENTE: CUADRO N° 4.

Análisis de cuadro y gráfica N° 4

3- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE ORALMENTE?

En cuanto a la pregunta N° 3, el 61% respondieron negativamente y como hemos indicado en este trabajo de graduación si es posible solicitarlo de esta forma aunque la forma normal es por escrito.

Cuadro N° 5

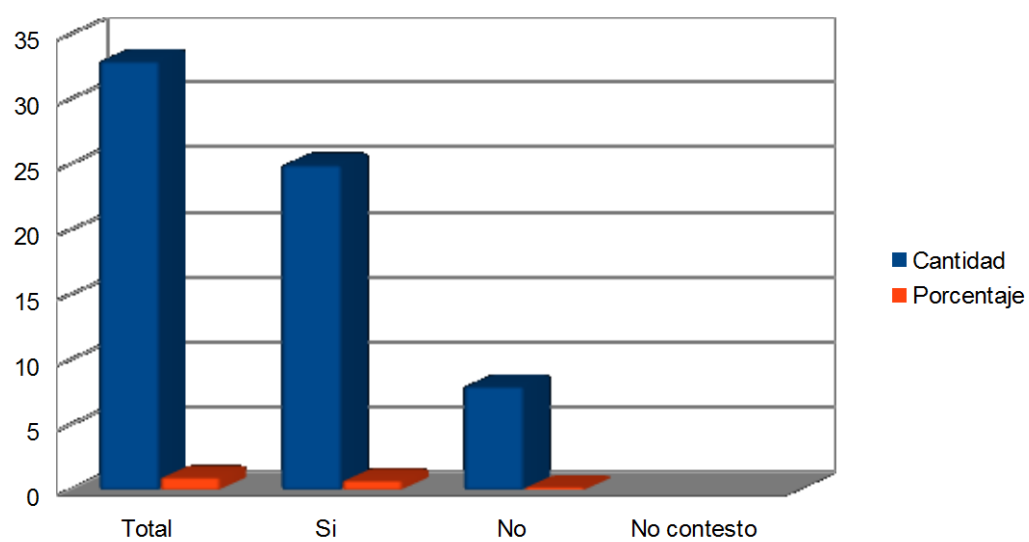
4- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE POR ESCRITO?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	25	76%
No	8	24%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 5

4- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE POR ESCRITO?



FUENTE: CUADRO N° 5

Análisis de cuadro y gráfica N° 5

4- ¿SABE SI ESTA PETICIÓN SE HACE POR ESCRITO?

En la pregunta N° 4 efectuada a los participantes el 76% contestaron afirmativamente lo que demuestra que la mayoría tiene conocimiento de las formalidades de esta figura en la esfera penal.

Cuadro N° 6.

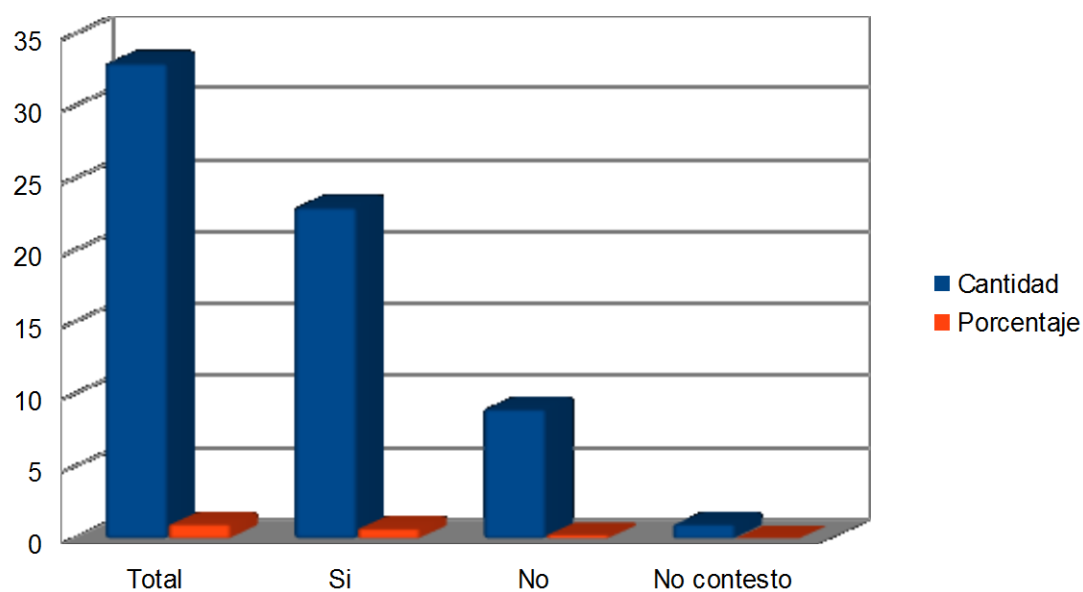
5- ¿SE DEBE FIJAR CAUCIÓN O NO, PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	23	70%
No	9	27%
No contesto	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 6.

5- ¿SE DEBE FIJAR CAUCIÓN O NO, PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL?



FUENTE: CUADRO N° 6.

Análisis de cuadro y gráfica N° 6.

5- ¿SE DEBE FIJAR CAUCIÓN O NO, PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL?

En la pregunta N° 5 efectuada a los participantes el 70% contestaron afirmativamente lo que demuestra que la mayoría tiene conocimiento de las formalidades de esta figura en la esfera penal.

Cuadro N° 7.

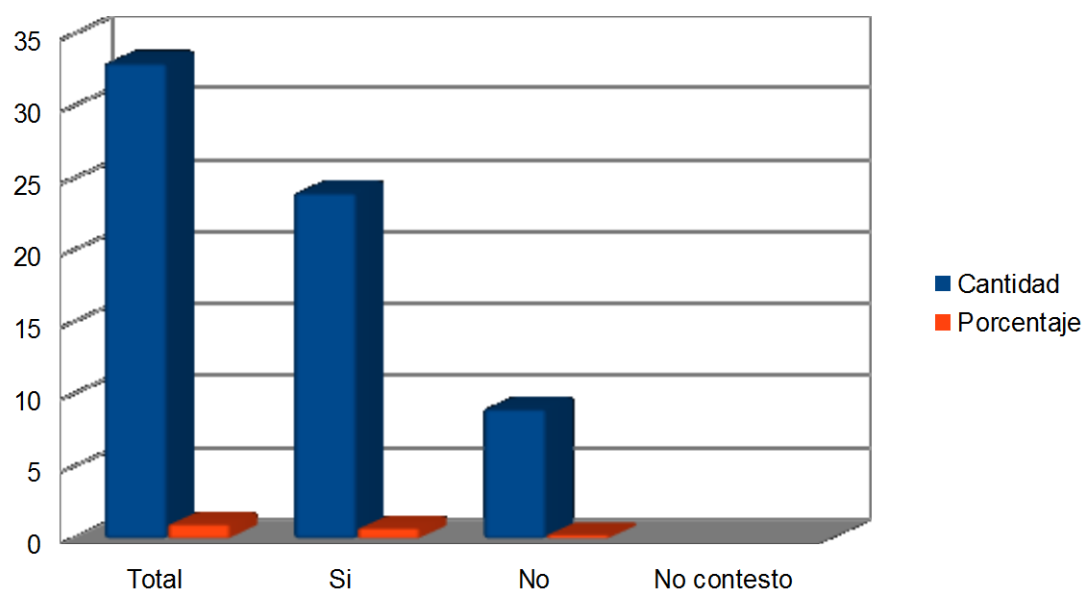
6- ¿PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL, CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE FIJAR CAUCIÓN?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	24	73%
No	9	27%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 7.

6- ¿PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL, CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE FIJAR CAUCIÓN?



FUENTE: CUADRO N° 7.

Análisis de cuadro y gráfica N° 7.

6- ¿PARA DECRETAR UN SECUESTRO DE ESTE TIPO EN LA ESFERA PENAL, CONSIDERA USTED, QUE SE DEBE FIJAR CAUCIÓN?

En la pregunta N° 6 efectuada a los participantes el 73% contestaron afirmativamente lo que demuestra que la mayoría considera que se debe fijar caución.

Por otro lado el 27% contestaron negativamente por lo que para ellos no se debe fijar una caución para llevar a cabo esta figura.

Cuadro N° 8.

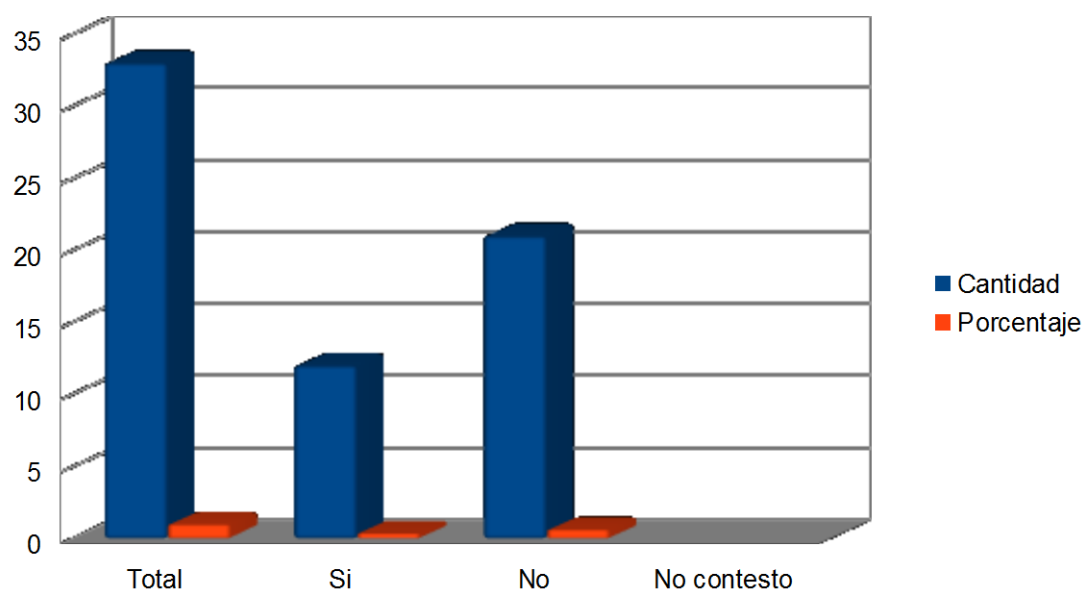
7- ¿EL SECUESTRO PENAL ES LO MISMO QUE EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	12	36%
No	21	64%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 8.

7- ¿EL SECUESTRO PENAL ES LO MISMO QUE EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?



FUENTE: CUADRO N° 8.

Análisis de cuadro y gráfica N° 8.

7- ¿EL SECUESTRO PENAL ES LO MISMO QUE EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?

En la pregunta N° 7 efectuada a los participantes el 21% contestaron negativamente lo que demuestra que la mayoría tienen el conocimiento de la figura de secuestro civil en sede penal.

Cuadro N° 9.

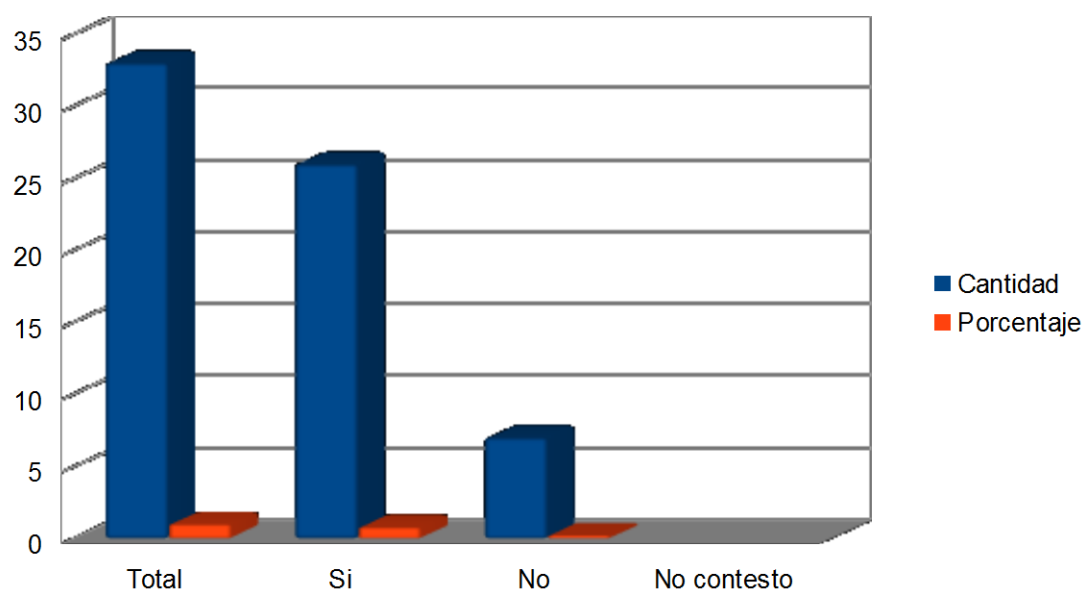
8- ¿SI SE NIEGA LA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL ES APELABLE?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	26	79%
No	7	21%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 9.

8- ¿SI SE NIEGA LA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL ES APELABLE?



FUENTE: CUADRO N° 9.

Análisis de cuadro y gráfica N° 9.

8- ¿SI SE NIEGA LA PETICIÓN DE SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL ES APELABLE?

En la pregunta N° 8 efectuada a los participantes en cuanto si se niega esta petición es apelable el 79% contestó afirmativamente demostrándose que si se les presenta esta figura y la niegan concederían el recurso de apelación para que el Tribunal de Apelaciones y consulta decida.

Cuadro N° 10.

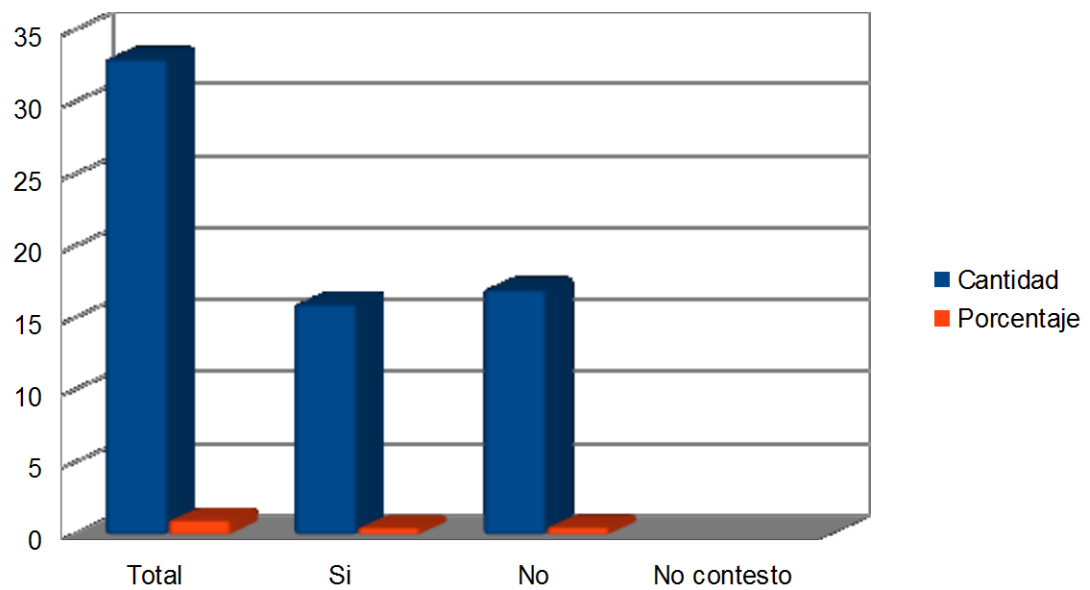
9- ¿EL JUEZ PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	16	48%
No	17	52%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 10.

9- ¿EL JUEZ PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?



FUENTE: CUADRO N° 10.

Análisis de cuadro y gráfica N° 10.

9- ¿EL JUEZ PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?

En el cuadro N° 10 observamos que las opiniones están divididas en este punto ya que el 48% respondió afirmativamente y el 52% respondió negativamente siendo que en el proceso penal no existe la figura del Alguacil Ejecutor y por lo tanto el Juez de Garantías debe a practicar la diligencia del secuestro civil en sede penal como ya se mencionó en el trabajo.

Cuadro N° 11.

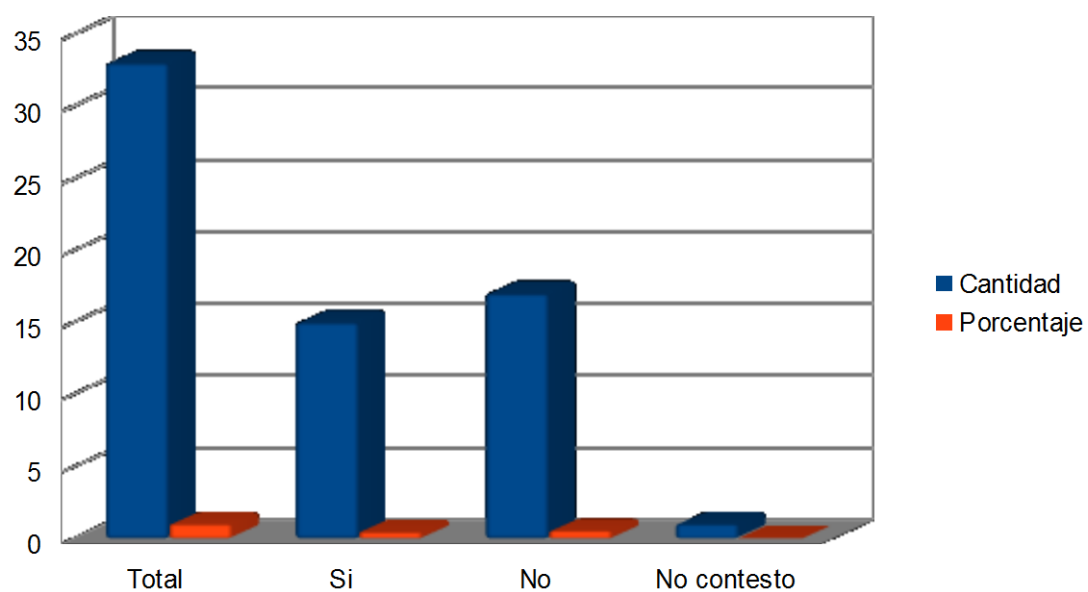
10- ¿LA OFICINA JUDICIAL PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	15	45%
No	17	52%
No contesto	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 11.

10- ¿LA OFICINA JUDICIAL PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?



FUENTE: CUADRO N° 11.

Análisis de cuadro y gráfica N° 11.

10- ¿LA OFICINA JUDICIAL PRACTICA LA DILIGENCIA DEL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL DECRETADO?

En el cuadro N° 11 observamos que las opiniones siguen estando divididas en este punto ya que el 45% respondió afirmativamente y el 52% respondió negativamente e incluso hubo un 3% que no contesto la pregunta y como se dijo en la anterior pregunta en el proceso penal no existe la figura del Alguacil Ejecutor y por lo tanto el Juez de Garantías debe a practicar la diligencia del secuestro civil en sede penal como ya se mencionó en el trabajo.

Cuadro N° 12.

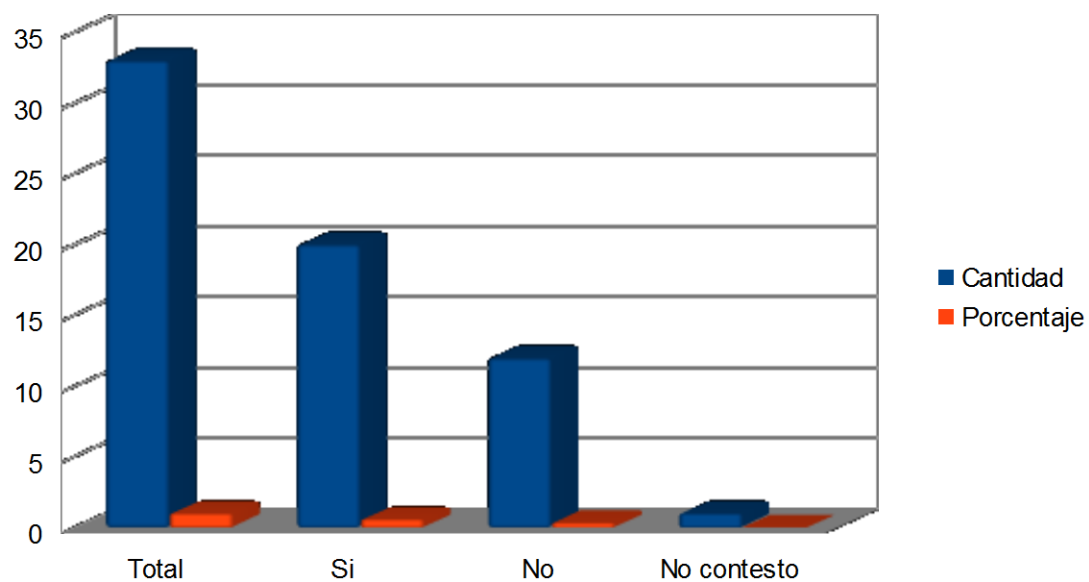
11- ¿SE PUEDE SOLICITAR EL REMATE DE BIENES SECUESTRADOS?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	20	61%
No	12	36%
No contesto	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 12.

11- ¿SE PUEDE SOLICITAR EL REMATE DE BIENES SECUESTRADOS?



FUENTE: CUADRO N° 12.

Análisis de cuadro y gráfica N° 12.

11- ¿SE PUEDE SOLICITAR EL REMATE DE BIENES SECUESTRADOS?

Mediante este cuadro y su respectiva gráfica se puede apreciar que según la opinión de los encuestados un 61% contestó afirmativamente o sea que se puede solicitar el remate de los bienes y el 36% consideró que no se puede pedir el remate.

Cuadro N° 13.

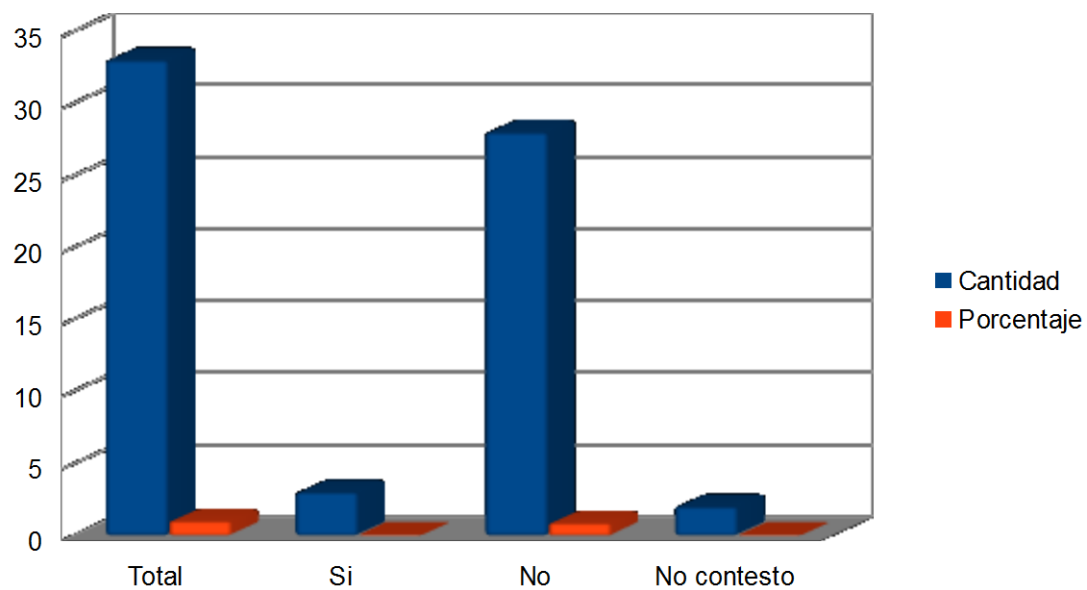
12- ¿EL JUEZ DE GARANTIAS REALIZA EL REMATE JUDICIAL?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	3	9%
No	28	85%
No contesto	2	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 13.

12- ¿EL JUEZ DE GARANTIAS REALIZA EL REMATE JUDICIAL?



FUENTE: CUADRO N° 13.

Análisis de cuadro y gráfica N° 13.

12- ¿EL JUEZ DE GARANTIAS REALIZA EL REMATE JUDICIAL?

La pregunta N°12 sobre si el Juez de Garantías realiza el remate el 85% contestó negativamente o sea una amplia mayoría piensa que no debe realizar el remate judicial incluso hubo un 6% que no contesto la pregunta y solo el 9% consideró que si debe realizarlo, por lo cual se demuestra la utilidad de este trabajo donde en el análisis realizado se comprobó que los Jueces de Garantías si deben realizar el remate judicial.

Cuadro N° 14.

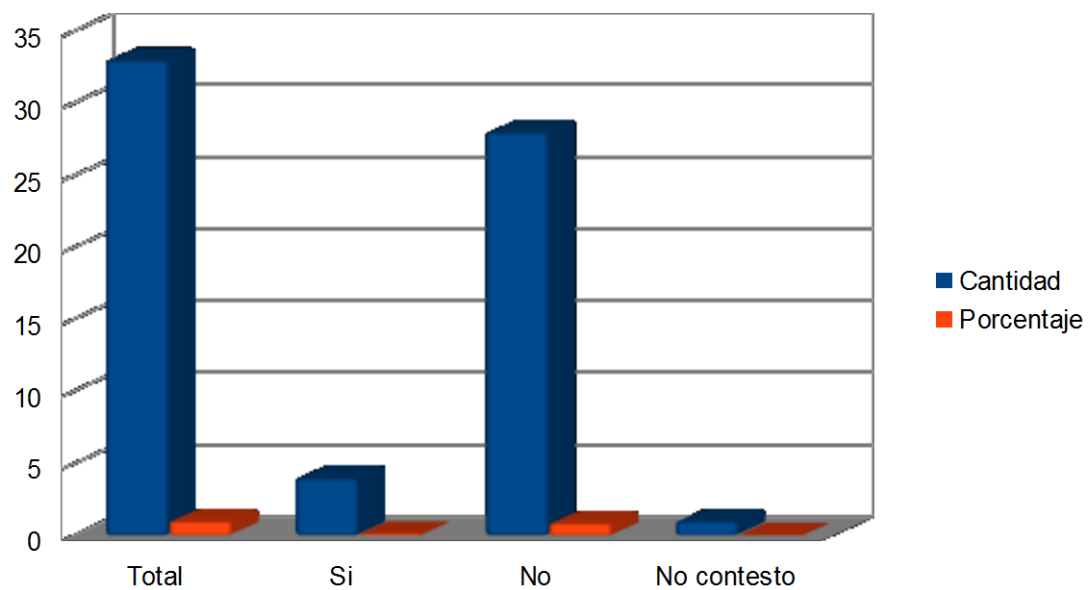
13- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN POR ESCRITO?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	4	12%
No	28	85%
No contesto	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 14.

13- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN POR ESCRITO?



FUENTE: CUADRO N° 14.

Análisis de cuadro y gráfica N° 14.

13- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN POR ESCRITO?

La pregunta N°13 la gran mayoría o sea el 85% contestó negativamente y solo el 12% contestó afirmativamente en virtud del principio de la oralidad que impera en el proceso penal acusatorio vigente en la República de Panamá.

Cuadro N° 15.

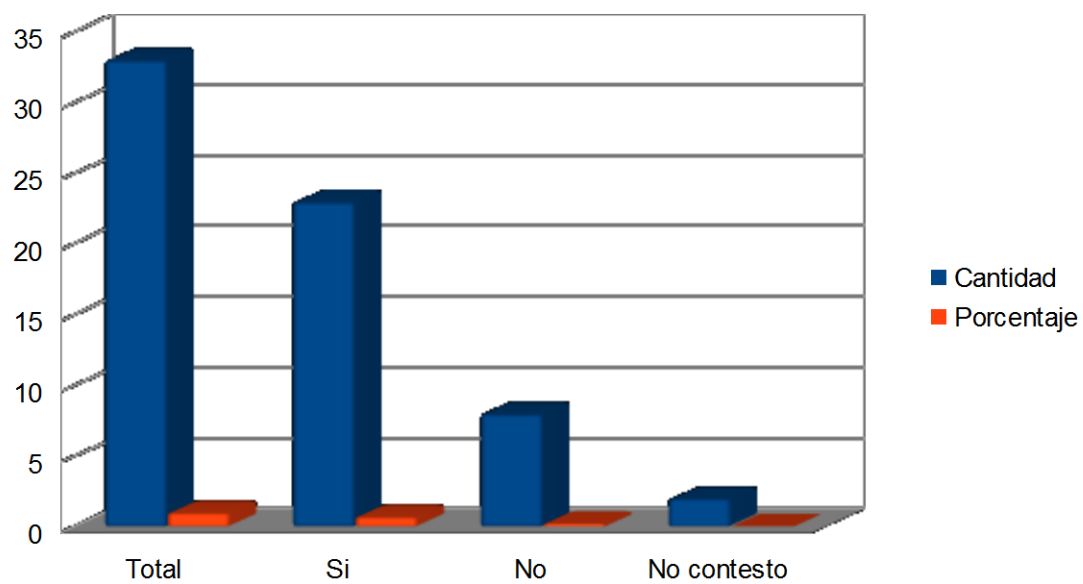
14- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN EN AUDIENCIA?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	23	70%
No	8	24%
No contesto	2	6%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 15.

14- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN EN AUDIENCIA?



FUENTE: CUADRO N° 15.

Análisis de cuadro y gráfica N° 15.

14- ¿SI SE DAN INCIDENCIAS, SE RESUELVEN EN AUDIENCIA?

Esta pregunta es lo contrario de la anterior y por supuesto el resultado es casi lo contrario de la anterior en donde el 70% contestó afirmativamente y solo el 24% contestó negativamente aplicando el principio de oralidad ya mencionado.

Cuadro N° 16.

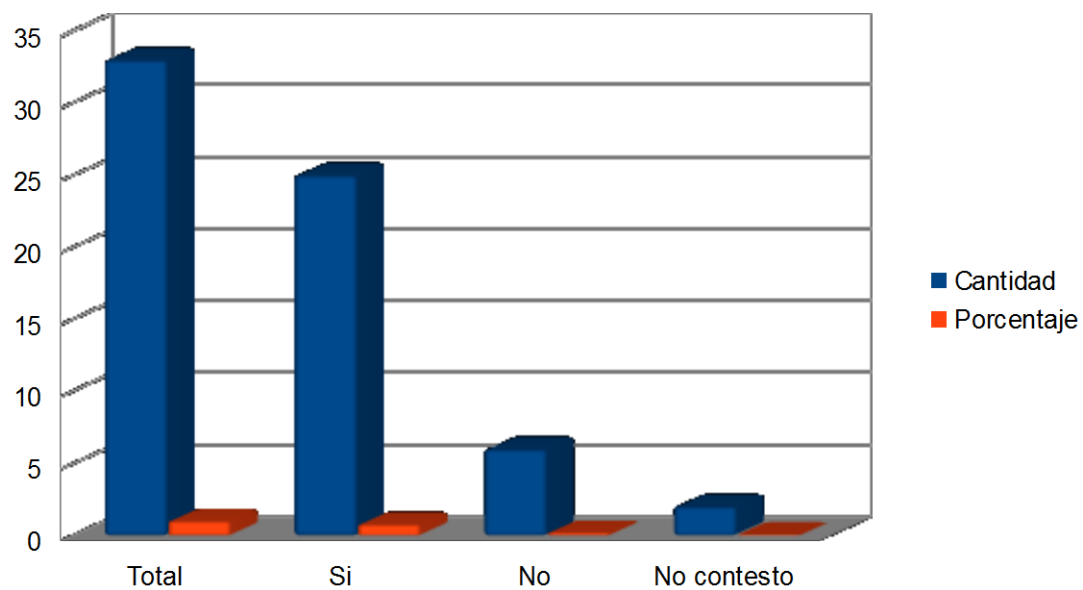
15- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES DECRETAN ESTA FIGURA?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	25	76%
No	6	18%
No contesto	2	6%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 16.

15- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES DECRETAN ESTA FIGURA?



FUENTE: CUADRO N° 16.

Análisis de cuadro y gráfica N° 16.

15- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES DECRETAN ESTA FIGURA?

La pregunta N°15 sobre si es apelable la resolución que decreta esta figura el 76% contestó afirmativamente a que si es apelable y solo el 18% contesto negativamente y como hemos visto en el trabajo esta figura es apelable.

Cuadro N° 17.

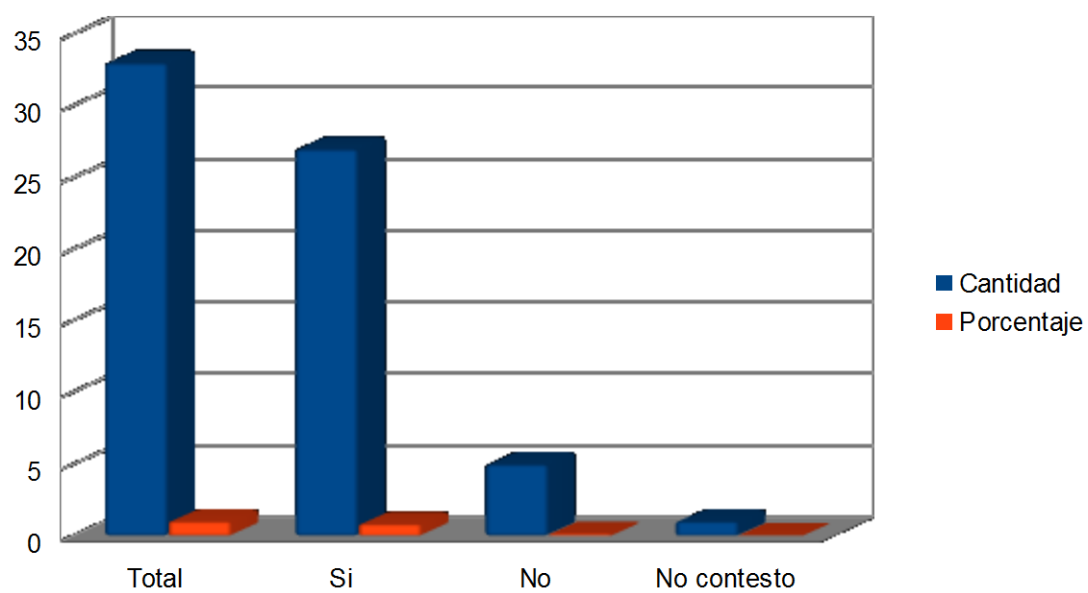
16- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES NIEGAN ESTA FIGURA?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	27	82%
No	5	15%
No contesto	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 17.

16- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES NIEGAN ESTA FIGURA?



FUENTE: CUADRO N° 17.

Análisis de cuadro y gráfica N° 17.

16- ¿SON APELABLES LA RESOLUCIONES NIEGAN ESTA FIGURA?

La pregunta N°16 sobre si es apelable la resolución que niega esta figura es totalmente lo opuesto a la pregunta anterior y el 82% contestó afirmativamente a que si es apelable y solo el 15% contesto negativamente y como hemos visto en el trabajo esta figura es apelable, por lo que se demuestra que la gran mayoría estuvo correcto en su respuesta.

Cuadro N° 18.

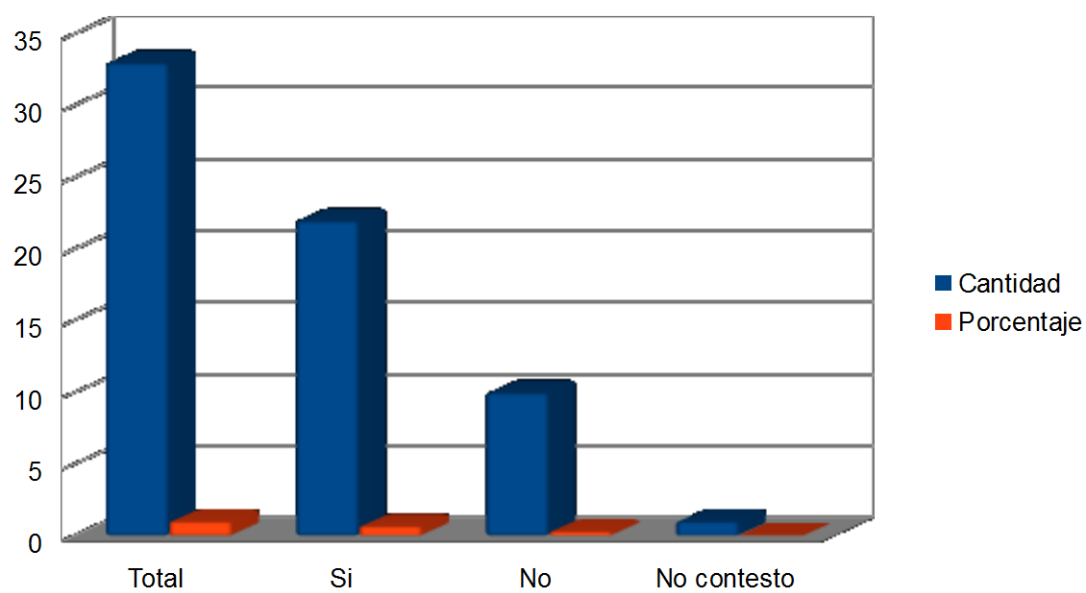
17- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, TERMINA EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	22	67%
No	10	30%
No contesto	1	3%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 18.

17- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, TERMINA EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?



FUENTE: CUADRO N° 18.

Análisis de cuadro y gráfica N° 18.

17- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, TERMINA EL SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL?

La pregunta N°17 sobre si es al concluir el proceso penal termina el secuestro civil en sede penal el 67% contestó afirmativamente y solo el 30% contesto negativamente concluyendo que la mayoría considera que debe terminar esta figura al terminar el proceso penal.

Cuadro N° 19.

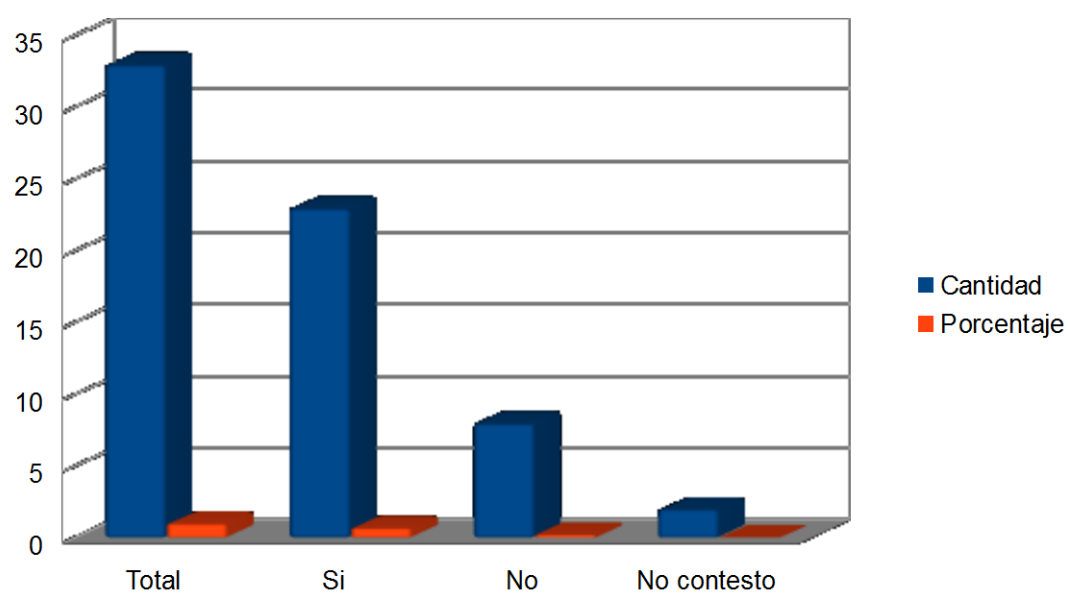
18- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE DEVUELVE LA FIANZA?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	23	70%
No	8	24%
No contesto	2	6%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 19.

18- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE DEVUELVE LA FIANZA?



FUENTE: CUADRO N° 19.

Análisis de cuadro y gráfica N° 19.

18- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE DEVUELVE LA FIANZA?

La pregunta N°18 sobre si es al concluir el proceso penal se devuelve la fianza el 70% contestó afirmativamente y solo el 24% contesto negativamente concluyendo que la mayoría considera que se debe devolver la fianza al concluir el proceso penal.

Cuadro N° 20.

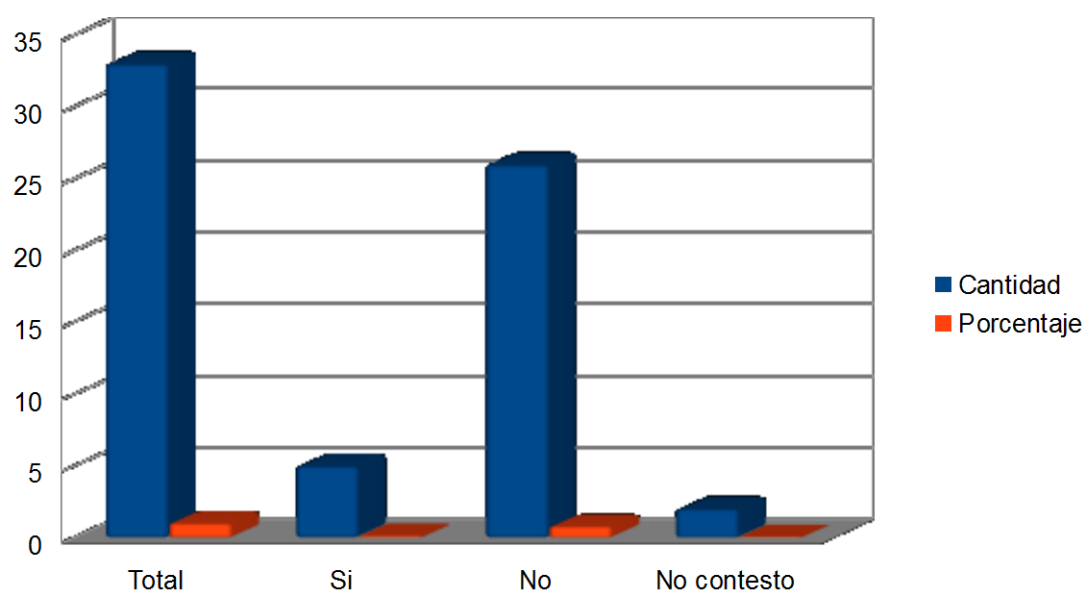
19-¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE ENTREGA LA FIANZA AL ESTADO?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	5	15%
No	26	79%
No contesto	2	6%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 20.

19-¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE ENTREGA LA FIANZA AL ESTADO?



FUENTE: CUADRO N° 20.

Análisis de cuadro y gráfica N° 20.

19- ¿AL CONCLUIR EL PROCESO PENAL, SE ENTREGA LA FIANZA AL ESTADO?

La pregunta N°19 sobre si es al concluir el proceso penal se entrega la fianza al Estados el 79% contestó negativamente siendo esta pregunta totalmente improcedente ya que esta figura es civil solo que se aplica en penal así no hay forma que se entregue la fianza al Estado estando la mayoría de los jueces estuvieron en lo correcto.

Cuadro N° 21.

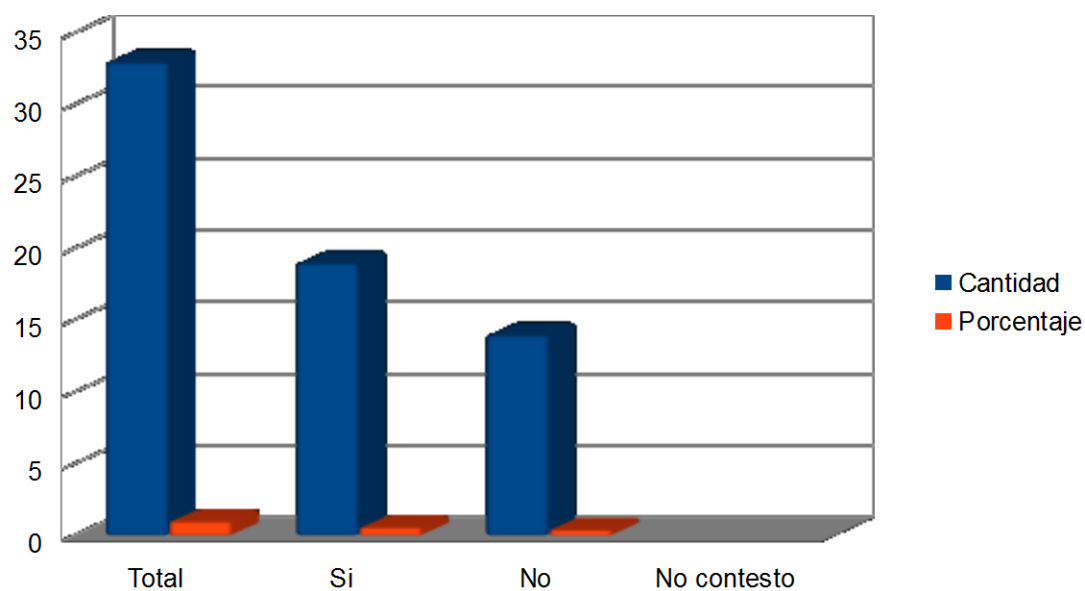
20- ¿SI A LA PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE PUEDE SOLICITAR LA FIANZA COMO PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS?

Conocimiento	Cantidad	Porcentaje
Total	33	100%
Si	19	58%
No	14	42%
No contesto	0	0%

Fuente: Encuesta aplicada a los Jueces de Garantías de la Provincia de Panamá, sedes de Panamá y San Miguelito y la provincia de Colón.

Gráfica N° 21.

20-¿SI A LA PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE PUEDE SOLICITAR LA FIANZA COMO PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS?



FUENTE: CUADRO N° 21.

Análisis de cuadro y gráfica N° 21.

20-¿SI A LA PERSONA QUE LE PRACTICARON UN SECUESTRO CIVIL EN SEDE PENAL, ES DECLARADO INOCENTE PUEDE SOLICITAR LA FIANZA COMO PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS?

La pregunta N° 20 sobre si a la persona que le practicaron un secuestro civil en sede penal es declarado inocente puede solicitar la fianza o caución como pago de daños y perjuicios el 58% contestó afirmativamente y el 42% negativamente lo que significa que se encuentra dividida la opinión sobre si se puede solicitar esta fianza o caución como pago de una posible demandad de daños y perjuicios pero como se escribió en este trabajo el Código Judicial indica que si es posible.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión podemos señalar que la figura de secuestro civil en sede penal en que el legislador patrio ha querido darle vigencia a los derechos de las víctimas, dentro de los cuales se encuentra el obtener la indemnización civil por los daños y perjuicios derivados del delito.

Por lo tanto, en procura de efectivamente darle vigencia a los derechos de las víctimas de delitos, y permitir que sea en la esfera penal, en el nuevo modelo del derecho procesal penal acusatorio; se atiendan esas reparaciones pecuniarias, por lo cual considero que es un logro de la justicia a favor de quienes se vieron forzados a formar parte de un proceso penal, como son la víctima y demás, permitirles equilibrar la balanza y haciendo que se privilegie la economía procesal y la concentración de los actos.

Sin embargo, después de estudiar esta figura y hablar con diferentes Jueces de Garantías puedo concluir que esta figura no se utiliza con mucha frecuencia, salvo cuando se trata querellantes como bancos y aseguradoras que son los menos. Y en los casos en los que se ha presentado, algunos tienden a confundirla con la figura del secuestro penal, que es aquella que sólo puede pedir el Ministerio Público, sobre las cosas relacionadas con el delito y para evitar un peligro de la eventual disposición, desaparición o destrucción de los bienes sujetos al comiso, contemplada en el artículo 259 del Código Procesal Penal.

Incluso me han afirmado que las peticiones que han efectuado por escrito los solicitantes, no señalan temas como la cuantía de los posibles daños y no se refieren ni si quiera a la formula con la cual el Juez de Garantías deba fijar la cuantía de la referida medida cautelar; por lo tanto en su mayoría se proceden a denegar debido al desconocimiento de los requisitos mínimos para poder pronunciarse con relación a ella.

Pese a lo anotado, considero que con trabajos como este más los abogados conocerán esta figura y se empezara a utilizar de un modo mas creciente y efectivo.

RECOMENDACIONES

Considero importante que los Jueces de Garantía, defensores de víctimas y los abogados particulares deben recibir su respectiva capacitación en torno a esta figura ya que esta sería la única forma en que tendrían el suficiente conocimiento para poder aplicarla en su práctica diaria.

Así mismo considero que al ser los Jueces de Garantía especializados en el proceso penal les podría ser difícil aplicar figuras que son netamente de derecho civil por lo que también podían trasladarse estos procedimientos a los juzgados civiles pero esto es algo que no recomiendo debido a la carga de estos y la velocidad que se necesita para tramitarlos por lo que también se podría crear una jurisdicción especializada que se encargue de todo lo relacionado con las indemnizaciones civiles en procesos penales incluyendo la figura del secuestro civil en sede penal.

Por ultimo considero que también se debería informar al público en general de esta figura y así podrían tener el conocimiento para poder solicitarla a su respectivo defensor de víctima o abogado particular constituido querellante y para esto sugiero que cuando se hacen programas de radio, televisión o internet sobre el Sistema Penal Acusatorio también en una parte se podría hablar sobre esta figura y también en los panfletos que reparten se podría agregar en un espacio, incluso que más los abogados civilistas que se han familiarizado con esta figura en sede penal, comiencen a utilizarla.

BIBLIOGRAFÍA

1. ALSINA, Hugo, Juicios ejecutivos y de apremio, medidas precautorias y de tercerías, Editorial Ju
2. APONTE CARDONA, Alejandro, Manual Para el Juez de Control de garantías en el sistema acusatorio penal, Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Escuela «Rodrigo Lara Bonilla», Colombia, 2006.
3. ARMENTA DEU, Teresa, Estudios sobre el proceso penal acusatorio, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, Argentina, 2008.
4. BADUEL, Maximiliano; BADUEL, Jorge E., Medidas Cautelares Trabadas Indebidamente, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1999.
5. BARRIOS GONZÁLEZ, Boris, El Juez de Garantías, Librería y Editorial, Barrios & Barrios, Panamá, 2016.
6. CUBAS VILLANUEVA, Víctor: El Proceso Penal, Teoría y Práctica, Palestra Editores, Lima 1998.
7. CUESTAS G., Carlos H., Diccionario de Derecho Procesal Penal, Colecciones Judiciales, publicación de la Escuela Judicial, Panamá, 2000.
8. DE SANTO, Víctor, Medidas Cautelares, Editorial Universidad S.R.L., Buenos Aires, Argentina, 1999.
9. FABREGA PONCE, Jorge, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Editora Jurídica Panameña, Panamá, segunda edición, 2004.
10. FABREGA PONCE, Jorge, Medidas Cautelares, Ediciones Jurídicas,

Gustavo Ibañez Ltda., Santa Fe de Bogotá, D.C., Colombia, 1998.

11. FAIRCHILD, Henry Pratt, Diccionario de Sociología, FCE, México, 1980.

12. FERNÁNDEZ LEÓN, Whanda, Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Librería Ediciones del Profesional, LTDA, Bogotá, Colombia, 2010.

13. FERIA BELLO, Patricia Jacqueline; CABALLERO ARIZA, Wilson, Bienes en el proceso penal, www.fiscalia.gov.co – 2010.

14. FORERO SILVA, Jorge Hernando, Medidas cautelares en el código general del proceso, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2016.

15. GARCIA SARMIENTO, Eduardo; GARCIA OLAYA, Jeannete M., Medidas cautelares, Introducción a su estudio, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, Segunda Edición, 2005.

16. GASCÓN INCHSUTI, Fernando, La Adopción de las Medidas Cautelares con Carácter Previo a la Demanda, Cedecs Editorial S.L., Barcelona, España, 1999.

17. JAUCHEN, Eduardo. Derechos del Imputado. Rubinzal Culzoni Editores.

18. JURADO ZAMORA, Aida J., Guía práctica para el estudio de los Principios, Garantías y Reglas del Proceso Penal Panameño: un enfoque acusatorio. Editora Novo Art. S.A., Panamá, 2009.

19. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El Proceso Penal entre la Eficiencia y la Justicia: la aplicación de técnicas de dirección judicial del proceso al sistema acusatorio colombiano, Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa Escuela «Rodrigo Lara Bonilla», Colombia, 2006.

20. MAIER B J., Julio. Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Tomo II Pág. 188.
21. MARTÍNEZ BOTOS, Raúl, Medidas Cautelares, Editorial Universidad, Buenos Aires, Argentina, 1994.
22. MARTÍNEZ BOTOS, Raúl, Medidas Cautelares, Editorial: Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1999.
23. MARTÍNEZ JIMÉNEZ, José, Derecho Procesal Penal, Editorial Tecnos (Grupo Anaya, S.A.), España, 2015.
24. ORTELLS RAMOS, Manuel; CALDERÓN CUADRADO, María Pía, La Tutela Judicial Cautelar en el Derecho Español, Editorial Comares, S.L., Granada, España, 1996.
25. PEREZ SARMIENTO, Eric Lorenzo, Fundamentos del sistema acusatorio de enjuiciamiento penal, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2005.
26. REYES, Luis Carlos., Las medidas cautelares en el proceso civil de la República de Panamá, Editor: Panamá Órgano Judicial, Escuela Judicial, Panamá, 2000.
27. RODRÍGUEZ MANZANERA, Luís. Victimología, Quinta Edición. Editorial Porrúa. México. 1999.
28. ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto s.r.l., Buenos Aires, Argentina, 2014.
29. SAN MARTÍN CASTRO, César Eugenio: Derecho Procesal Penal – Tomo I, Editora Grijley, Lima 2006.

30. VALLS GOMBAU, José Francisco, Las Medidas Cautelares y Los Recursos, Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, España, 2000.

31. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
<http://rae.es./drael/SrvltGUIBusUsual>.

CODIGOS Y LEYES

1. Constitución Política de la República de Panamá de 1972. Reformada por los Actos Reformativos de 1978, el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos de 1994.
2. Código Procesal Penal, Ley 63 de 28 de agosto de 2008, Gaceta Oficial N°26114 de 29 de agosto de 2008.
3. Código Judicial, Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, Modificada por Ley N°48 de 1 de septiembre de 2009, Publicadas en las Gacetas Oficiales N°26114 de 29 agosto de 2008 y N°26358-A de 1 septiembre de 2009.
4. Ley 67 de 30 de octubre de 2009, Gaceta Oficial N°26401-B de 2 de noviembre de 2009.
5. Ley 2 de 2010 de 5 de febrero de 2010, Gaceta Oficial N°26468-B de 10 de febrero de 2010.
6. Jurisprudencia